

## GUATEMALA, 1982: EL CORAZÓN DEL ORDEN BURGUÉS CONTEMPORÁNEO\*

MANOLO E. VELA CASTAÑEDA

EL 23 DE MARZO DE 1982 EL PRESIDENTE de la República de Guatemala, general Fernando Romeo Lucas García, vio cómo, en el túnel que conecta al Palacio Nacional con la residencia presidencial, su hermana mecía la cabeza de su madre de 90 años mientras un soldado les apuntaba (DIA, 1983). Esta escena coronó el golpe de Estado y el presidente dejó de serlo. Cedió el poder a un triunvirato conformado por los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Shaad y Francisco Luis Gordillo. La escena —el instante y sus actores— desató en la historia de Guatemala un cambio político que moldeó el orden burgués contemporáneo. Pero más que en un breve instante, la escena se construyó lentamente.

El presente ensayo es una contribución al debate de una coyuntura fundacional en la historia de Guatemala. Se trata del estudio de un caso en un contexto particular, el de una rebelión aplastada con el uso brutal del terror que da paso a la democratización del régimen. El nuevo orden político se asienta sobre la violencia desatada en aquel momento de la historia. Se trata de indagar en esa compleja mezcla del momento de la guerra y el momento de la política. Me interesa ver cómo la guerra se desliza en la política, la invade, la utiliza, la coloniza, y la una se expresa a través de la otra. El golpe de Estado de marzo de 1982 en Guatemala ilustra cómo la política es la continuación de la guerra por otros medios. De qué forma en la guerra se hallan las racionalidades del orden político. Hasta dónde la inversión de la máxima de Clausewitz de que la guerra es la política por otros medios, formulada por Michel Foucault, puede ser útil para

\* Este artículo fue inspirado por la cátedra “Poder y dominación” que el profesor Nelson Minello impartió entre marzo y junio de 2004, dentro del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de México. El profesor Minello, gran maestro del pensamiento de Michel Foucault, recibió como trabajo de curso la primera versión; sus comentarios, junto con los de los revisores anónimos de la revista, la mejoraron. Guardo también un profundo agradecimiento al programa de becas de la Secretaría de Educación Pública de México.

comprender momentos y acontecimientos históricos.<sup>1</sup> La compleja mezcla de la guerra y la política torna inseparables ambas categorías. En la serie de hechos que dieron paso a aquel momento en la historia de Guatemala es imposible distinguir los motivos de la guerra y los motivos de la política. La guerra y la política se presentan mutuamente penetradas. No existe con nitidez un momento de la guerra y otro de la política.

El relato formula una nueva interpretación de aquel momento a partir del uso de fuentes hasta ahora no revisadas. Nos referimos aquí a la combinación de documentos desclasificados de diversas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, información hemerográfica y testimonios. Acerca de los primeros, empleamos los del Departamento de Estado, de la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) y de la CIA. También se hace uso de la información que sobre unidades y oficiales del ejército de Guatemala fuera recopilada —con base en documentos desclasificados— por Carlos Osorio y Kate Doyle (2000), y de la cronología de la operación de asistencia a la contra nicaragüense que, apoyándose en material asimismo desclasificado, elaboró el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, 1987). La información de carácter hemerográfico proviene del semanario *Inforpress*, *NACLA Report on the Americas*, el *iF Magazine*, *Al Jazeera Network*, el *Covert Action Quarterly*, y de los periódicos *Prensa Libre*, *The Miami Herald*, *The New York Times* y *The Washington Post*. El material de carácter testimonial proviene fundamentalmente de diversos textos del general Héctor Alejandro Gramajo Morales y del dirigente insurgente Mario Payeras. La interpretación se fundamenta en la aplicación de un enfoque analítico diferente del que hasta ahora ha sido base de las explicaciones prevalecientes. El análisis desconfía de la presencia y acción racional de un ente llamado “coalición gobernante”, que es capaz de colocar bajo su control todo acontecimiento; que, asociado a él, todo encuentra un sentido automáticamente, fácil de establecer. Demostrar que lo que en apariencia es evidente y necesario se desmorona lentamente y cómo, tras aquello que cae, se abren otras explicaciones que dan cuenta de las ra-

<sup>1</sup> Éste es el tema central de las once lecciones del curso que Michel Foucault dictara en el Collège de France, entre el 7 de enero y el 17 de marzo de 1976 (Foucault, 1976). La violencia de la guerra no es la naturaleza del poder, es su negación, su extremo. Es expresión de una profunda debilidad, que al mismo tiempo reclama la vida de ciertos habitantes para imponerse, para manifestarse frente a los otros. Pero es a la vez resultado y medio. Es también un medio porque la violencia de la guerra construye un orden. La violencia de la guerra necesita negarse a través de los discursos que la legitiman, a través de la creación de un orden. Además, nunca opera sola. Es parte de todo un conjunto de recursos: discursos, formulaciones ideológicas, hechos, acciones no violentas. No se trata de ver cómo lo racional y lo irracional se oponen, sino de ver cómo ambos moldean un orden, necesiándose, excluyéndose, contradiciéndose.

cionalidades de los hechos. Lo anterior hace que las explicaciones en torno al caso de Guatemala puedan rebasar las fronteras geográficas, y originar importantes derivaciones teóricas en torno a otros procesos de cambio sociopolítico.

PRIMERA PARTE. Y LA GUERRA DIJO: “HÁGASE UN NUEVO ORDEN POLÍTICO”

*¿Qué es 1982 en la historia de Guatemala?*

Es la celebración de la victoria. Los poderosos mirando entre sus dedos índice y pulgar a quienes osaron rebelarse en su contra. La revuelta ha sido aplastada. La copa en alto de los vencedores, que aseguran que Guatemala no será ya un país comunista. Es presenciar cómo, quitándose la máscara del “buen comportamiento democrático”, en las relaciones de poder se emplea un tipo de violencia que recuerda los peores momentos de la historia de la humanidad. Pero, contrariamente a lo que pudiera pensarse, el momento cumbre de esa coyuntura no ocurre con la brutalidad sino cuando, consumado ya el terror “necesario” –en la misma escena incluso–, la máscara vuelve a ser colocada en su lugar. Quienes osaron rebelarse –o quienes el régimen pensó que podían llegar a hacerlo– yacen muertos. Sus familiares –individuos singulares– enfrentan un profundo trauma. El aparato de Estado debe seguir su marcha –ahora con un problema más– ocultando cadáveres y los vestigios de la autoría de aquellos hechos. El poder se talló en el cuerpo. En él quedaron los rastros de la violencia de la guerra.

1982 será, también, un momento de rupturas y recomposiciones en el mundo de las derechas y las izquierdas, legales o armadas. Es la emergencia de un discurso en la izquierda, que convirtió la derrota aplastante en el inicio de un nuevo ciclo de resistencia, que culminará con los Acuerdos de Paz de 1996. Los insurgentes rechazaron el sentido de la derrota tras el discurso del *bellum justum*. Para éstos la democracia, el correlato del golpe de Estado, cuando no la descalifican de plano, es una causa de su propia lucha. Aquella fecha marca también el relevo en el liderazgo de la extrema derecha: Mario Sandoval Alarcón, el líder del anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN) ve surgir de las sombras de 1974 al general Efraín Ríos Montt, quien lo desplazó en 1982. El general Ríos Montt vuelve a la palestra. Su salida del gobierno, tras 16 meses, en agosto de 1983, por medio de otro golpe de Estado, no impedirá su retorno seis años después, en 1989.<sup>2</sup> No obstante, su liderazgo en los sucesos que culminaron el

<sup>2</sup> En 1989, su movimiento político conquistó 12 escaños en el Congreso. En 1994, el

23 de marzo de 1982 debe ser cuidadosamente borrado o acomodado a las circunstancias. Deben crearse interpretaciones como las que nos presenta Alfonso Yurrita (1997: 125): “Para hacerse cargo del gobierno se llamó al general, en situación de ‘disponibilidad’, Efraín Ríos Montt, quien gozaba de prestigio por la labor que había desarrollado al frente de la Escuela Politécnica.” Se debe, además, encontrar una explicación a su presencia en aquel suceso. Así, Contreras y Castro indican: “era un militar a quien muchos oficiales, sobre todo jóvenes, respetaban por su trayectoria en el ejército. Se le consideraba un ciudadano honesto y capaz, por lo que no fue por accidente que se le llamó para dirigir el gobierno, esperando que combatiera la corrupción en el propio ejército y en toda la administración pública” (1997: 67). El relato debe crear al líder. Hacerlo encajar a toda costa en la escena.

Aquella coyuntura marca el inicio de un nuevo liderazgo en el mundo de las élites económicas, el que tratará de abrazar el discurso democrático y desembarazarse de sus conexiones con la guerra y el terror. A lo largo de la década de los años setenta las élites económicas disfrutaron de altas tasas de ganancia.<sup>3</sup> 1982 será, asimismo, el momento en el que emerge una nueva manera de entender la relación entre el Estado y la economía, que en adelante los organismos financieros internacionales impondrán a los países.

---

Frente Republicano Guatemalteco (FRG) obtuvo la primera mayoría. En 1995 Ríos Montt fue electo presidente del Congreso. En las elecciones para presidente de aquel mismo año no logró ser inscrito como candidato, pero el candidato de su partido alcanzó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las que perdió por escaso margen (Daetz, 1997). Entre 2000 y 2004 llegó a ser en cuatro veces consecutivas presidente del organismo legislativo. En la historia política de Guatemala, esto solamente fue igualado por Mario Sandoval Alarcón, entre 1971 y 1974. En el mismo periodo (2000-2004), su partido se hizo con la presidencia. En 2003 cerró un ciclo, al lograr por fin ser inscrito como candidato a la presidencia y alcanzar 518 464 votos (20% del total de votos válidos) (TSE, 2004). Su inscripción como candidato fue posible cuando su partido –con la mayoría en el Congreso– pudo someter al organismo que se encarga de llevar a cabo el control constitucional. El FRG incidió decisivamente en la elección de tres de los cinco magistrados que integran dicho cuerpo colegiado. De esa forma el artículo constitucional que prohibía la inscripción de quienes habían participado en golpes de Estado, alzamientos militares o rebeliones tuvo una “interpretación” adecuada al momento.

<sup>3</sup> La tasa de recaudación tributaria (en aquella época la más baja de Centroamérica), la política arancelaria, la legislación laboral y la política crediticia –importantes instrumentos de política económica en aquel entonces en manos del gobierno– favorecieron los negocios que las élites económicas llevaron a cabo. Algunas de las cifras que ejemplifican las altas tasas de ganancia durante la década de los años setenta: 1) entre 1970 y 1980, el PIB per cápita pasó de 1 195.00 dólares a 1 570.00 (CEPAL, 1986). 2) conforme a la CEPAL (1986: 11), las cifras récord de crecimiento del PIB se registraron en 1974 y 1977, con 6.1% y 7.4%. 3) entre 1975 y 1977, los precios del café aumentaron 400%, y el valor de las exportaciones se duplicó (Gordon, 1989: 162). Para mayor detalle véase Bulmer-Thomas, 1987.

La coyuntura de 1982 también marca el restablecimiento de las relaciones con el gran aliado, los Estados Unidos. Éstas habían llegado a un punto crítico en 1980, cuando Guatemala salió de los programas de asistencia militar. Ello tuvo como antecedentes las críticas que en 1977 formularan la Casa Blanca y el Congreso a los abusos que, en materia de derechos humanos, cometía el régimen guatemalteco. Al análisis de ese proceso está dedicado una parte de este artículo (“El gran jugador: Estados Unidos”).

En aquella disparatada escena de 1982 los militares aparecerán –como quien se cambia rápidamente de indumentaria– rescatando al país y promulgando la democracia. Para el ejército, aquella fecha está impregnada de heroísmo: frente a la corrupción, el fraude electoral, la crisis económica y los guerrilleros que preparaban la “ofensiva final”, la acción de “un grupo de valientes” le devolvió la democracia a Guatemala. Para el observador incauto, aquel momento en el que se hablaba de elecciones, derechos humanos, del restablecimiento de la democracia, a la vez que se continuaba con una campaña contrainsurgente que arrasaba con poblaciones enteras, pudo haber parecido contradictorio. El tono emocional de los acontecimientos cobra características perturbadoras si nos percatamos de ciertos rasgos de la personalidad del jefe de Estado, que los domingos aparecía en cadena nacional pronunciando fogosos discursos religiosos, en los que la familia, la monogamia y el matrimonio, o la ingesta de bebidas alcohólicas, eran temas frecuentes.<sup>4</sup> ¿Había realmente una contradicción entre

<sup>4</sup> En diciembre de 1982, el jefe de Estado, general Efraín Ríos Montt reunió a la cúpula de la administración pública. Él leía un juramento, hacía una pausa y todos repetían: “Me comprometo ante Dios y ante la patria a cambiar. Y a lograr a través de todos mis actos, cambiar a Guatemala. Me comprometo a que mis actuaciones estén dentro del marco de la ley y a exigir a todas aquellas personas bajo mi responsabilidad que hagan lo propio para cumplirla. Me declaro ante Dios y ante la Patria enemigo de la corrupción y de la injusticia, debiendo ser ejemplo de mis conciudadanos. Le pido a Dios que me ayude a cumplir” (Asturias, 1995: 174). Pero el auge de la iglesia evangélica en Guatemala había empezado años atrás, con la cooperación internacional que llegó cuando el terremoto de 1976 (Rose y Schultze, 1991). Para 1980, según datos del *Directorio del movimiento protestante* (1981), 18% de la población total de Guatemala era evangélica. Dentro de las razones del crecimiento se destacan –muy a la teoría de la modernización– los procesos migratorios del campo a la ciudad, y el papel que para aquellos trabajadores esta forma religiosa representó en función de su adaptación a su nuevo entorno (Garrand, 1998). También hubo una racionalidad política: ante la violencia contra las luchas sociales, la teología protestante planteaba la salvación individual y un profundo retraimiento en relación con el entorno social; así, en medio de la guerra, ser evangélico se tradujo en apartarse de la revuelta (Rose y Schultze, 1991). Más allá de estas interpretaciones, en los análisis de CERIGUA (1987), Esquivel (1992) y García (1985), el protestantismo es también analizado como un instrumento fundamental en la batalla ideológica de la contrainsurgencia. Acerca de las raíces conservadoras del protestantismo en los Estados Unidos durante el periodo de Ronald Reagan, véase especialmente Ordóñez (1996).

las matanzas y las bendiciones por televisión? ¿Qué papel representaba la idea de Dios bendiciendo a Guatemala, dando seguridad a unos a cambio de la muerte de otros? ¿Qué clase de Dios es este al que unos piden la muerte de otros?

Pero, también, 1982 es el punto de partida de la liberalización del régimen y de la transición a la democracia: “Ésa fue la base del desarrollo de la democracia en Guatemala”, sentencia el general Efraín Ríos Montt (Paredes, 2003). “El 23 de marzo de 1982 es el principio de la vida institucional de ahora. Por ejemplo, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, se creó la Ley de Hábeas Corpus y el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó años después uno de los miembros del triunvirato militar, el general Francisco Luis Gordillo (*Prensa Libre*, 2000) ¿Cómo permitir que el brillo de la celebración se opaque al conocerse el sentido, los actores y el proceso que desembocó, la mañana del 23 de marzo, en la decisión de llevar adelante un golpe de Estado? En síntesis, la tarde del 23 de marzo tres oficiales militares, armados, vestidos en “uniforme de fatiga”, daban una conferencia de prensa en el Salón de los Espejos del Palacio Nacional. Al centro, el general Efraín Ríos Montt. La historia cuenta que un puñado de “oficiales jóvenes” derrotó a un gobierno corrupto, autoritario, en el inicio de una de las más graves crisis económicas en la historia de América Latina, internacionalmente aislado y, para colmo, incapaz de destruir a la insurgencia. Aquello es tan sencillo de afirmar que no nos dice mucho. Es un conjunto de razones y argumentos condensados en la proclama que leyeron los líderes de la asonada militar aquella tarde. Entre aquel discurso y las causas y factores que configuran un momento histórico hay un camino por recorrer.

### *Las interpretaciones*

Algunas interpretaciones han hecho un *leitmotiv* de la indignación por la forma en que la democracia pasó a ser un instrumento más de la guerra, lo que no es nada nuevo. Se imposibilita así descubrir las racionalidades. Entender cómo aquello era posible desde su funcionamiento. Como si, al rechazarlos, los acontecimientos se hicieran inteligibles. Bajo esta línea, seguiríamos pensando que la guerra y la política son dos extremos que “deben” excluirse mutuamente. Que la “racionalidad” de la política “debe” excluir la “irracionalidad” de la guerra. De esa forma no logramos distinguir la suma, el conjunto de racionalidades que emergieron alrededor de marzo de 1982. “La democracia es el poder sin violencia. Lo opuesto es el Estado autoritario y las diversas modalidades en el uso de la fuerza como recurso inmediato”, advertirá Edelberto Torres (1998: 26).

Otros han buscado afanosamente cómo el golpe de Estado de marzo de 1982 se vincula con el mantenimiento, la prolongación y la reproducción de cierto tipo de relaciones económicas. La búsqueda de dicho vínculo ha pasado por alto las relaciones de fuerza que constituyeron y dieron forma al acontecimiento. Intentan ver fracciones de clase que no aparecen por ninguna parte en este último; contradicciones que no se explican al ras de los hechos, sino en el papel de lo supuesto; un interés de clase que, cual fuerza iluminadora, lo explica todo sin dar cuenta de nada. Un criterio de inteligibilidad que no llega a los hechos, pero que sirve para suponer e introducir la realidad en la explicación. Así, el golpe de Estado redefinió equilibrios entre las fracciones de la burguesía, advertirá Susanne Jonas (1994: 168), como resultado de una “pugna interburguesa” al “agudizarse extremadamente las contradicciones en el seno del mundo burgués” (Figueroa, 1991: 150-151); también hubo un “reconocimiento del fracaso de la dictadura militar como medio de dominación hegemónica sobre la sociedad civil” (Figueroa, 1991: 150-151). Paul Dosal advertirá que, “para prevenir el colapso total de la coalición gobernante y una victoria de la URNG, oficiales jóvenes se rebelaron el 23 de marzo de 1982 [...] El golpe de Estado de 1982 marca el primer intento de los militares por detener la fragmentación de la coalición gobernante” (Dosal, 1995: 149).

Por lo general, las explicaciones del golpe coinciden en que en marzo de 1982 Guatemala estaba al borde del abismo. Se subraya la crisis económica, el fraude electoral, la ineptitud militar del gobierno de Lucas García, la corrupción, el aislamiento internacional. En esto concuerdan Susanne Jonas (1994) y Héctor Alejandro Gramajo Morales (1995, 1991, 1988), entre otros. Para aquellos análisis, la proclama que el 23 de marzo de 1982 leyeron los militares rebeldes sintetiza las causas que dieron forma a aquel suceso. Yo creo que la verdad es otra. O mejor dicho, que detrás de aquella verdad o conjunto de verdades están presentes múltiples racionalidades que nos ayudan a comprender mejor el acontecimiento. La primera conclusión lleva a la segunda, por tanto, que el golpe era la única salida posible para “rescatar al país” de la crisis; “redefinieron el destino de la institución y del propio país”, advertirá Alfonso Yurrita (1997: 124). A lo largo de las páginas que siguen demostraré que otras opciones fueron, por momentos, posibles, y daré cuenta de la forma como estos cursos de acción se fueron cerrando. Esto se halla desarrollado en el apartado “Las elecciones como fraude”.<sup>5</sup> En suma, los análisis hasta ahora prevalecientes concluyen que

<sup>5</sup> Basta por ahora, de forma sintética, precisar algunas de estas opciones: 1) La designación de un civil como candidato de la alianza oficial de gobierno; 2) El atentado que en junio de 1979 quitara la vida al general David Cancinos Barrios, entonces jefe de Estado Mayor General, quien se perfilaba como candidato a presidente del partido de gobierno; 3) Que el

hacía falta un plan estratégico (el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo) y un grupo de personas para llevarlo adelante (los oficiales jóvenes). El golpe será –por tanto– ideado, planificado y ejecutado íntegramente por el ejército, indignado por el estado de cosas. A contrapelo, me parece que el golpe de Estado de marzo de 1982 no se explica fuera del contexto en el que los ejércitos de América Latina, sin abandonar el poder, se retiraron a sus cuarteles y dejaron el gobierno.

Aquí partimos de ver el orden político que atravesó más de dos décadas de la historia de Guatemala y se hace presente frente a nosotros desde la guerra y la violencia. Es un “lugar” desde donde interrogarlo y desnudar sus racionalidades, desde donde hacer muchos cortes transversales profundos para saber cómo se ejercía el poder en aquel momento, cómo funcionaba. No se trata de decir lo que pasó y hallar una explicación que pruebe cuán imperiosos eran los acontecimientos finalmente ocurridos, las rutas trazadas o el camino recorrido, y encontrar una inteligibilidad fuera de los hechos. Más bien pretendo poner en duda ese carácter de necesidad, de ruptura, la profundidad de ésta, y evaluar las otras opciones, los otros cursos que durante algún tiempo también pudieron ser factibles. Sacudir violentamente las falsas evidencias que han hecho simple la compleja vinculación entre acontecimientos y procesos históricos. A contracorriente de los análisis hasta ahora presentados, pretendo demostrar tres cosas:

a) Que aquel golpe pudo haber sido evitado, es decir, que en determinados momentos existieron otras opciones que en aquellas circunstancias eran factibles;

b) Que la razón fundamental para el golpe de Estado fue el fracaso de Estados Unidos en su intento de persuadir a una parte del alto mando del cuerpo de oficiales del ejército de retirarse de la política y concentrarse en la guerra, democratizando de paso al régimen político; y

c) Que la presencia y decisión del gobierno de Estados Unidos vuelve –tal y como sucedió en junio de 1954– a ser la clave de inteligibilidad de aquel hecho.

Desmoronar, cuales bloques de arena, una serie de verdades que más de dos décadas han convertido en fortalezas de concreto. A la par de las victorias militares, sobre la marcha se crean otras verdades, las más de las veces más importantes que lo propiamente militar. La forma en que hasta

---

presidente hubiera atendido las advertencias acerca de los preparativos para un golpe de Estado formuladas desde diciembre de 1981, lo que le habría permitido someter el movimiento; 3) La aceptación, por parte del presidente, de la solicitud de los candidatos de oposición para convocar a nuevas elecciones; y 5) Que el gobierno se hubiera visto imposibilitado de realizar el fraude electoral y que finalmente el candidato ganador hubiera sido el líder de la oposición, Mario Sandoval Alarcón, del Movimiento de Liberación Nacional.



ahora aquel acontecimiento ha sido explicado opaca ciertas aristas de la realidad y pone, porque lo necesita, de relieve otras. 1982 condensó una secuencia de sucesos y un conjunto de significados. Es el punto en el que se anudan los hilos con los que se teje la Guatemala contemporánea. El punto de anclaje del presente: “por muy lejos y muy rápido que corra, la cadena corre siempre con él” (Nietzsche, 1874). Antes que un ejercicio arqueológico de saber qué pasó en marzo de 1982, comprendo que los cimientos de un nuevo orden burgués fueron colocados en aquel momento. Pero, ¿deseo hacer una historia del golpe de Estado? Por supuesto que no. Mi intención es apuntar hacia el corazón del orden burgués contemporáneo. Descubrir sus racionalidades tras (en) aquel hecho: hacer una genealogía del orden burgués contemporáneo que emergió en 1982. Desbaratar uno a uno los argumentos que han hecho de aquel suceso un mito. Enfrentarlo cara a cara, exorcizarlo y rastrear a los demonios que de él salen, explicar su papel en aquella no-verdad.

#### SEGUNDA PARTE. DE CAUSAS HONORABLES Y OPERACIONES ENCUBIERTAS

El carácter evitable o inevitable del golpe de Estado está dado por la forma como diversas causas se enredan unas con otras, complementándose, contradiciéndose, provocándose. La naturaleza de éstas, su ritmo, sentido y temporalidad es diversa. Lo específico de aquel momento se halla en su convergencia en tiempo y espacio. A continuación se exponen, una a una, las causas que se cree que dieron forma al golpe de Estado de marzo de 1982. Haremos un recorrido por cada una de ellas, intentando entender sus manifestaciones más concretas. La corrupción, la supuesta ineficacia de la estrategia contrainsurgente y el avance de la guerrilla, y finalmente el recurso del fraude electoral, más que causas determinantes, me parece que no son más que razones en boca de quienes la tarde del 23 de marzo se alzaron con el poder. Al entender razones como causas, la secuencia de hechos adquiere rasgos épicos, míticos, heroicos, propios del tono emocional con que los autores necesitan diligentemente impregnar sus acciones. La historia se convierte entonces en las razones de los actores. En un momento histórico, éstas no siempre constituyen la causa de los acontecimientos. Por ello, en el último apartado de esta segunda parte, intentamos explicar cómo actuó Estados Unidos en esta coyuntura. La potencia concentró sus esfuerzos en la contención de la amenaza guerrillera en El Salvador.<sup>6</sup> Esta

<sup>6</sup> Los debates en las comisiones del Congreso de Estados Unidos reflejan las percepciones de las élites académicas y de la administración sobre la situación de El Salvador. Esto puede verse en los documentos del Congreso que se detallan a continuación: *The Situation in El*

estrategia presuponía que la guerra en Guatemala no se prolongara y que su nivel de intensidad no se tornara crítico. Para ello era preciso hacer eficiente la contrainsurgencia, sacando a los militares del poder y permitiendo que partidos políticos emprendieran ciertas reformas democráticas.<sup>7</sup> Pero antes, unas brevísimas notas en torno a los antecedentes.

### *Los años setenta*

Si la década de los setenta pudiera condensarse en un solo cuadro, en éste tomarían parte las élites económicas, los militares y los guerrilleros preparándose para la batalla, y un liderazgo social que emerge.<sup>8</sup> Estarán en aquel cuadro vecinos que se rebelan y alcanzan victorias, como la Nicaragua de 1979, o que amenazan al régimen, como El Salvador, desde el 10 de enero de 1981, cuando da inicio la ofensiva militar del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) (Benítez, 1989). Y por supuesto, Estados Unidos, para el que esta región se convirtió en una importante trincheira de la Guerra Fría.

Se trataba de una economía en pleno crecimiento, no obstante el inicio de lo que después fue una profunda crisis; con una alta inversión estatal que había construido instituciones; una cúpula militar ávida de entrar

---

*Salvador* (1981), *El Salvador: The United States in the Midst of a Maelstrom* (1982) y *Presidential Certifications on Conditions in El Salvador* (1982a).

<sup>7</sup> Los lineamientos de esta estrategia se hallan en las lecciones aprendidas por Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Éstas serían presentadas de forma sistemática por el general Harry Summers (1982, 1985). Parte de estos presupuestos serán analizados en el apartado "El gran jugador: Estados Unidos". Michael T. Klare (1981: 2) especifica algunas de las manifestaciones institucionales de la estrategia de Estados Unidos que fueron afectadas por el síndrome de Vietnam: "1) la Ley de Poderes de Guerra y otras restricciones legislativas sobre la capacidad presidencial de hacer la guerra en el extranjero, 2) la abolición de la conscripción y el establecimiento de un servicio militar voluntario, 3) restricciones sobre las operaciones encubiertas de la CIA y otras agencias de inteligencia, y 4) las alianzas militares con 'gendarmes sustitutos' como Irán (bajo el sha) y Egipto (bajo Sadat)". Pero el centro de las definiciones se lee en el siguiente texto de otro militar estadounidense: "La guerra contraguerrillera es por naturaleza altamente política. La habilidad para ganarla se basa en acciones militares y políticas del acosado gobierno anfitrión" (Paschall, 1985: 43).

<sup>8</sup> La marcha de los mineros de Ixtahuacán marcará un hito en la historia de las luchas sociales en Guatemala. Documentado en la obra de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el movimiento se inició con la participación de 70 mineros que salieron el 11 de noviembre de 1977 del municipio de San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Al llegar a la ciudad, los manifestantes eran 150 000. El movimiento alcanzó todas sus reivindicaciones y ejemplificó la forma en que las luchas entre el campo y la ciudad se habían articulado (ASIES, 1995).

en los negocios de la corrupción y la política, que compartía la escena con políticos profesionales, con quienes mantenía un complejo juego de equilibrios. Un país con tensas relaciones con una parte de la comunidad internacional (Estados Unidos y España), pero que contaba con el apoyo de países como Argentina, Sudáfrica, Chile, Israel, Taiwan, Corea del Sur, entre otros. Con elecciones, Constitución, enunciación de derechos, división de poderes, las instituciones propias del régimen democrático. Más que un contraste, aquello hacía parte —estaba plenamente integrado— con el empleo de mecanismos de terror cada vez más brutales. El general Gramajo (1991) resumió así el estado de cosas en 1982: “Un escándalo financiero en medio de una aguda crisis por falta de divisas, caída del PIB y fuga de capitales, alto nivel de desempleo, debilitamiento de la estructura jerárquica del mando militar, una campaña extraordinariamente eficaz de la insurgencia en la organización de la población indígena del altiplano central y occidental.” En palabras del general Gramajo Morales: “...Nuestro país se encontraba al borde del colapso —una sociedad intolerante y polarizada, con instituciones políticas decadentes, una economía debilitada por la fuga de capitales y aislada a nivel internacional...” (Gramajo, 1988). Fernando Andrade Díaz-Durán, canciller entre 1983 y 1986, confirma este estado de ánimo: “Guatemala había caído en el abismo de una profunda crisis [...] y necesitaba un reordenamiento político” (Andrade, 1988).

El escenario de la crisis termina de acomodarse con las elecciones de 1982. En aquel entonces, la candidatura oficial volvió a ser presentada por la alianza del Partido Institucional Democrático (PID) y el Partido Revolucionario (PR), que postulaba al general Ángel Aníbal Guevara y a Ramiro Ponce Monroy. Éstos se hicieron con la victoria, al alcanzar 379 050 votos (38.86%).<sup>9</sup> Las elecciones se realizaron el domingo 7 de marzo. El 13 de marzo se llevó a cabo la elección de segundo grado por parte del Congreso, de la que resultó ganador la dupla compuesta por Guevara y Ponce (Daetz, 1997). Entre aquella fecha y la toma de posesión, establecida para el 1º de julio, mediaban más de tres meses. Mucho antes de las elecciones, varios actores estaban interesados en que el proceso electoral no culminara con normalidad.

<sup>9</sup> El Movimiento de Liberación Nacional (MLN) postuló como candidatos a Mario Sandoval Alarcón para la presidencia y a Lionel Sisniega Otero para la vicepresidencia, dos líderes del anticomunismo. Éstos obtuvieron 275 487 votos (28.24%). La Central Auténtica Nacionalista (CAN) postuló a Gustavo Anzuelo Vielman (ministro de Comunicaciones con el gobierno de Arana Osorio) y a Luis Alfonso López para presidente y vicepresidente, respectivamente; alcanzaron 99 047 votos (10.16%). La Democracia Cristiana presentó a Alejandro Maldonado Aguirre (ministro de Comunicaciones del gobierno de Arana Osorio) y a Roberto Carpio Nicolle para presidente y vicepresidente, respectivamente; obtuvieron 221 810 votos (22.74%) (Daetz, 1997).

*La corrupción como recurso de poder*

La participación de funcionarios de gobierno en actos de corrupción, más que una causa determinante, me parece que fue, de principio a fin, una baza que los contendientes emplearon en contra de un régimen que debía caer. El buen recurso de la corrupción será siempre una excelente arma para destruir al adversario. ¿De cuándo acá quienes disfrutaban de la corrupción se indignan? ¿En qué momento los actos de corrupción preocuparon al alto mando del cuerpo de oficiales, a los empresarios, a Estados Unidos? En el momento en que tuvieron una utilidad en el enfrentamiento contra quienes pasaron a ser aliados incómodos.

Lo que no puede ser puesto en duda es la existencia de actos de corrupción y la publicidad de éstos. Jim Handy (1986) recuerda cómo, en julio de 1981, un grupo de oficiales denunció al periódico mexicano *UnomásUno* que “\$250 millones de los \$425 millones del presupuesto para la adquisición de armamento fueron desviados a las cuentas que cinco generales de alto nivel tenían en las Islas Caimán”. En *Garrison Guatemala* (Black, Jamail y Stoltz, 1984) se describe al alto mando de la institución armada en los siguientes términos: “Una camarilla de militares de alto rango que funcionaba, en todo salvo el nombre, como comité central, permitiéndoles amasar inmensas fortunas [...] merced a las posibilidades que el poder casi ilimitado les proporcionaba”. Susanne Jonas refiere lo siguiente: “También los oficiales jóvenes del ejército protestaron públicamente por la corrupción de los jefes de alto rango, y por otras políticas que realmente estaban fortaleciendo el apoyo de la guerrilla” (1994: 163). La extensión —y probablemente la agudización o la mayor publicidad— de una cultura de corrupción forma parte del sentido común de aquellos años. Como sus predecesores, aquel fue un gobierno corrupto.

Lo que es preciso destacar es que, a diferencia de otras gestiones gubernamentales, ahora alguien estaba interesado en hacer uso de ello como arma de poder. Pasar de lo que ya se sabe, el hecho puro y duro de funcionarios públicos (militares y civiles) que robaban al amparo de una arraigada impunidad, a la utilidad política de la corrupción en el juego de poder entre unos y otros. Es eso lo que pretendo destacar y creo que ello cambia la interpretación de este factor en el 23 de marzo. Criticar los actos de corrupción fue de utilidad, no sólo para los nuevos gobernantes que entraron en el gobierno con el golpe de Estado, sino también para la propia institución militar. El ejército emergió la tarde del 23 de marzo de 1982 renovado. Entre los actos de corrupción —sentido común de los gobiernos militares— y la institución armada se creaba una distinción: “no, no fuimos nosotros, fue el gobierno de Lucas García”. En adelante, a través de este recurso se deslindaría la responsabilidad de las fuerzas armadas en el sa-

queo que funcionarios hicieron del Estado. De esa forma, llegará a incluirse la apelación a la corrupción como uno de los puntos de la proclama leída la tarde del 23 de marzo de 1982. El nuevo gobierno puso en prisión a ciertos ex funcionarios del régimen anterior, ninguno de ellos militar. Meses después, cuando la propaganda no los necesitaba más, fueron liberados. La corrupción debía continuar. “Hay ahora más corrupción de la que hubo nunca en el pasado y eso se hará saber al público”, sentenciaba la DIA en un cable secreto días antes del golpe de Estado que diera fin al gobierno del general Ríos Montt (DIA, 1983).

### *¿Cuándo se conquistó la victoria? Las contrainsurgencias*

La ineficacia de la estrategia contrainsurgente, por parte del régimen de Lucas García, es otra de las causas mencionadas para entender el golpe. Para Jonas, “los conflictos eran tan graves que alimentaron un creciente descontento dentro del mismo ejército como consecuencia de la incapacidad del gobierno de Lucas para ganar la guerra contra la guerrilla” (1994: 163). Alfonso Yurrita (1997: 124) refiere un incidente en el que “un grupo de oficiales de baja graduación se dirigió entonces a sus instructores de la Escuela Politécnica para señalar que el gobierno estaba desgastando a la institución armada y que, en lugar de atacar las causas del problema de la insurgencia, se recurría solamente al empleo de la fuerza bruta para combatir la estrategia guerrillera de poner a la población adelante”. Me parece que el momento decisivo de la guerra se libró en el segundo semestre de 1981, cuando el ejército recobró la iniciativa en los ámbitos urbano y rural con el desarrollo de una estrategia militar. Con ésta, se alcanzaron tres objetivos:

- a) Se “descabezó” al conjunto de organizaciones y movimientos sociales que emergieron y se fortalecieron durante la década de los años setenta;
- b) Se desarticuló la base de operaciones logísticas de las organizaciones insurgentes en Ciudad de Guatemala, a través de métodos de inteligencia; y
- c) Se emprendió la primera estrategia de “tierra arrasada”, la que tras el golpe de Estado sería continuada, en su forma, y profundizada en cuanto al número de objetivos (comunidades borradas de la cartografía).

A inicios de 1982, el estado de ánimo de “ofensiva final” de parte de la insurgencia se había desvanecido en las derrotas militares. El nuevo ciclo de la guerra, que había dado inicio en junio de 1975, terminaba sin victoria para las organizaciones guerrilleras. Los frentes militares en el área rural habían eludido el combate. Se replegaron. Las organizaciones sociales estaban en retirada, sus dirigentes habían sido asesinados uno a uno o en bloque. La ciudad se había convertido en el cementerio de los aparatos de

logística y de las células guerrilleras (Payeras, 1987). De esa cuenta, para la coyuntura del golpe de Estado (marzo de 1982), la guerra había dejado de ser un asunto de corto plazo. Es decir, el Estado no perdería la guerra en los próximos doce meses. Con esto, las reclamaciones por la incapacidad en la estrategia contrainsurgente se diluyeron. Es lo que expresa Jonas: “Varias de sus quejas (las de los oficiales jóvenes) quedaron satisfechas cuando el general Benedicto Lucas, hermano del presidente, lanzó una nueva campaña de contrainsurgencia” (1994: 163).

En agosto de 1981, el hermano del presidente, el general Benedicto Lucas García, se hizo cargo del Estado Mayor General del Ejército (EMG), desde donde puso en marcha, y dirigió personalmente, una campaña en la que concentró una gran cantidad de efectivos para masacrar aldeas completas. La estrategia se basó en un sistema de mando operacional a través de fuerzas de tarea: áreas de operación independientes de las brigadas militares, en las que se rotaban batallones de las fuerzas de reacción estratégica y de regiones militares con menor actividad militar (CIA, 1983a). Los dos militares que lideraron la victoria contrainsurgente fueron el general Manuel Benedicto Lucas García, jefe del EMG, y el coronel Héctor Ismael Montalbán Batres, jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) y director del Centro de Recolección de Información (CRIO).<sup>10</sup>

Una evidencia de la situación militar en marzo de 1982 la presenta el semanario *Inforpress*. Al realizar un análisis del proceso electoral, una semana después, evaluó el movimiento insurgente en estos términos: “numerosas acciones guerrilleras se registraron en el interior del país, aunque su incidencia fue mínima en la realización del evento electoral” (484: 3). *Inforpress* consigna, un día después de celebradas las elecciones, una conferencia de prensa del general Benedicto Lucas, en la que expresa con satisfacción que el accionar guerrillero no había afectado la realización de éstas. Una guerrilla que, en medio de una crisis política, no sabotea el proceso electoral es una guerrilla cuya capacidad operacional está en duda.

No obstante, las victorias militares son evaluadas (opacadas) únicamente en el campo de lo “táctico”: no hay estrategia, afirman los detractores. “Se ganaban la mayoría de combates y las batallas pero la oficialidad, princi-

<sup>10</sup> El CRIO fue una agencia de inteligencia que empezó a funcionar, de acuerdo con Gramajo Morales (1995: 163), el segundo semestre de 1981. Este organismo, además de centralizar la información proveniente de diversas fuentes militares y paramilitares, tenía a su disposición unidades que se encargaban de ejecutar las operaciones derivadas de la información recolectada y procesada. El 29 de febrero de 1984, al dejar el cargo de jefe del Estado Mayor Presidencial y coordinador del CRIO, Montalbán Batres pasa a ser instructor en el Colegio Interamericano de Defensa. Véase Osorio (2000). Gramajo Morales (1995: 163) refiere que el coordinador del CRIO (segundo al mando, después de Montalbán) era el teniente coronel César Nájera Cifontes.

palmente, no miraba una luz al final del túnel”, advertirá años más tarde el general Gramajo Morales (2003: 83). Estas críticas forman parte de una campaña de negación respecto de la participación de la institución militar en esta etapa de terror. Lo que en aquellos años sucedió en Guatemala –que seguirá a lo largo de 1982 y 1983– forma parte de uno de los momentos más atroces en la historia contemporánea de América Latina. Como si, con criticar la forma en que se desarrolló la guerra, se negara la participación que en ella se tuvo. Distinguir una forma de hacer la guerra de otra, en función de crear un blanco al cual criticar y hacer creer que la guerra posterior al golpe fue estratégica porque racionalizó el terror, lo empleó mejor. El objetivo consiste en deslindar a la institución militar del terror en los “tiempos de Lucas García”, a pesar de que con ello se opaca a los verdaderos estrategias militares que lograron aquella victoria. Hay victorias que no soportan a los héroes públicos. La historia contada precisa hacerlos anónimos.

Pero la crítica a la forma “luquista” –permítanme el término– de hacer la guerra da para más. Servirá también para crear el mito del oficial de campo. El joven combatiente que libra la guerra contra una insurgencia bien equipada. Muy a pesar de una camarilla de militares corruptos, a quienes la guerra importa poco. Así, nos cuenta el general Gramajo: “El oficial que combatía en las selvas, montañas y ciudades empezó a sentir la necesidad de una estrategia, aunque fuerte en acciones militares, flexible en otros aspectos; una estrategia si bien dura, flexible como el acero, para que no se quebrara [...] En este escenario tomó forma una conspiración que tuvo éxito desalojando al gobierno de turno en forma violenta por medio de una rebelión militar el 23 de marzo de 1982” (Gramajo, 2003: 83-84). Una utilidad más. La estrategia a la que se hace alusión sería formulada en 1982 –comenta el propio general Gramajo– dentro del llamado “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo”, por los coroneles:

– Rodolfo Lobos Zamora, director del Centro de Estudios Militares (CEM) durante el gobierno del presidente Lucas García; llegó a ser Jefe del EMG después del golpe;

– César Augusto Cáceres Rojas, director de Operaciones del EMG y director interino del CEM durante el gobierno del presidente Lucas García; mismo cargo que siguió ocupando tras el golpe de Estado; y

– Héctor Alejandro Gramajo Morales, director de operaciones del EMG entre 1976 y 1978; subdirector de la Escuela Politécnica durante el gobierno del presidente Lucas García; subjefe del EMG tras el golpe de Estado y jefe del Teatro de Operaciones Sur Occidental (TOSO).

Después del golpe de Estado, el “nuevo liderazgo” de las fuerzas armadas encomienda al jefe y al subjefe de la Sección de Operaciones del EMG del anterior gobierno y al antiguo director del CEM que le elaboren una es-

trategia. La nueva estrategia se confía a los mismos que hicieron mal la guerra.<sup>11</sup> Así, la atención no se ha centrado en confirmar las continuidades en el alto mando después del golpe de Estado, sino en acentuar ciertas fricciones derivadas de la efímera constitución de la junta militar, y las secuelas de las acciones del 23 de marzo de 1982.<sup>12</sup> La historia hasta ahora contada necesita anular la continuidad entre los regímenes de Lucas García y Ríos Montt. Presentar a este último rodeado de un grupo de militares honestos, quienes se enfrentaron y derrotaron a un ejército guerrillero a punto del zarpazo final, con un pensamiento estratégico que hasta ese entonces se hizo presente. “Después de más de diez años, el ejército pensaba y actuaba a nivel estratégico”, dirá el general Gramajo (2003: 84). A partir de dicho pensamiento estratégico, el terror se racionalizó. Es esto lo que está presente cuando el mismo general llega a afirmar: “El Código de Conducta del Soldado Combatiente recordaba y exigía al soldado un comportamiento respetuoso y comedido con la población civil no beligerante; que juntamente con la observancia de las Reglas del Encuentro, hicieron el accionar militar más profesional y suavizó su relación con la población, los críticos más severos del ejército explican que la represión fue más selectiva” (Gramajo, 2003: 84). En febrero de 1983, un telegrama secreto de la CIA, comentado por el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Frede-

<sup>11</sup> “Se encargó diseñar un plan estratégico a tres coroneles que tenían experiencia en estrategia militar: los coroneles Rodolfo Lobos Zamora, César Augusto Cáceres Rojas y Héctor Alejandro Gramajo Morales. Estos tres artífices del Ministerio de la Defensa, del Estado Mayor del Ejército y del Centro de Estudios Militares bajo las órdenes del general Ríos Montt, junto con algunos profesionales civiles y administradores escogidos, se dedicaron a actualizar la evaluación estratégica de 1980 del Centro de Estudios Militares, a reformular la estrategia militar y a crear, con una campaña de contrainsurgencia muy elaborada, un Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo a largo plazo en varias etapas.” (Schirmer, 2000: 52).

<sup>12</sup> La junta fue un grupo de seis militares cuya composición y función de asesoría al triunvirato fue objeto de críticas de parte de la jerarquía. Compuesta por un oficial “representante” de cada grado militar, la junta violentaba la jerarquía militar al colocar en condición de asesoría, por igual, a oficiales de distintos rangos. El 12 de abril, la orden general núm. 10 del Ministerio de la Defensa, entre otras rotaciones de personal, exigía el envío de estos seis militares a cargos regulares dentro de la institución (DIA, 1982). El telegrama secreto de la DIA (1982) refiere: “durante recientes reuniones de la junta, el general Ríos se ha visto obligado a utilizar su antigüedad militar y su posición de presidente de la junta para poner fin a las discusiones cuando el grupo asesor intentaba presionar por que la junta accediera a sus deseos. A medida que el grupo continuaba desafiando su autoridad e interrumpiendo las reuniones, el general tomó la decisión de acabar con el proceso de ‘gobernar como comité’ y trasladar a cada uno de los seis oficiales”. Las tensiones derivadas de ciertas acciones protagonizadas contra el mando de oficiales superiores, el 23 de marzo son evaluadas en los siguientes términos: “durante las últimas dos semanas, el respeto hacia la línea jerárquica parece estar retornando [...] Ríos visitó la mayoría de los cuarteles y habló tanto con los oficiales subalternos como con los superiores, enfatizando la necesidad de respetar las órdenes y la autoridad” (DIA, 1982).



ric Chapin, contraviene el sentido de “profesionalismo” al que el general Gramajo aludía: “Después de la última reunión a finales de octubre de 1982 [censurado] informó a los oficiales del Archivo de Seguridad del Estado Mayor Presidencial que eran libres para arrestar, retener, interrogar y deshacerse de guerrilleros sospechosos a su conveniencia [censurado] Comentario: [...] durante los últimos meses se ha venido produciendo un incremento constante de la violencia, supuestamente, de extrema derecha; los secuestros, sobre todo de estudiantes y profesores, han aumentado en número; y los cadáveres vuelven a aparecer de nuevo en las cunetas y las zanjas, con señales típicas de los escuadrones de la muerte derechistas, y que recuerdan otras ejecuciones habituales del régimen anterior [...] estoy firmemente convencido que la violencia descrita [...] es ordenada y dirigida por el gobierno de Guatemala y no ‘violencia de extrema derecha’ y que esas no son ‘ejecuciones de los escuadrones de extrema derecha’ sino, de nuevo, ejecuciones ordenadas por oficiales de las fuerzas armadas próximos al presidente Ríos-Montt” (CIA, 1983).

Pero como si no fuera ya suficiente, a la condición de inminente caída del régimen a manos de la insurgencia se acompaña otra argumentación. Se presenta como traición la negativa de Estados Unidos a apoyar el esfuerzo contrainsurgente. Se dice que durante su fase decisiva, la guerra se desarrolló con “recursos propios”. “Sin la ayuda norteamericana le dijimos no a la URNG”, afirmará el general Efraín Ríos Montt (Paredes, 2003). Alfonso Yurrita señala: “Ante la persistencia de su aislamiento internacional y la falta de ayuda estadounidense, el Ejército tuvo que realizar grandes esfuerzos para mantener la campaña contrainsurgente exclusivamente con recursos internos” (1997: 126). El papel de Israel, Argentina, Chile, Sudáfrica y de otros países que colaboraron con la contrainsurgencia guatemalteca debe ser borrado de la historia. “Paradójicamente, la falta de asistencia militar extranjera provocó un efecto positivo que dejó a la imaginación e ingenio militar guatemalteco el desarrollo de los medios necesarios para que el ejército cumpliera su misión”, dirá el general Gramajo (1995: 119).

En suma, presentar una cierta incapacidad para controlar a la insurgencia como causa del alzamiento del 23 de marzo tiene grandes utilidades. Sirve para deslindar a la institución armada de la manera “luquista” de hacer la guerra: táctica, irracional, con énfasis en el terror y la brutalidad. Igualmente, con esto se da la idea de una guerrilla a punto de tomar el poder, lo que no sólo es útil para presentar al ejército, con el golpe, arrebatando un triunfo, salvando al país, sino que también justifica el empleo del terror. Se inventa al militar sacrificado, que libraba la guerra en las montañas a pesar de la falta de apoyo de los generales de Lucas García. Finalmente, se remata aquel conjunto de argumentaciones diciendo que la

guerra se libró con recursos propios. Hay veces en las que una verdad explica un momento, un hecho y sus circunstancias. Otras veces, una verdad es capaz de explicar una época. Esto último es lo que está detrás de esta verdad. Los usos que de ella se hacen dan una idea de cuán inexpugnable se precisa hacerla. Al destruirla, en sus pedazos se aprecia cuánto de los acontecimientos logramos explicar por otros medios.

### *Las elecciones como fraude*

El recurso del fraude electoral fue empleado en 1974 y 1978. Eufemísticamente, en sus memorias el general Gramajo denomina a esto “elecciones arregladas”. En ambos casos fue criticado por la oposición y por amplios sectores sociales. Incluso, de forma más enérgica y masiva que en 1982. La incorporación de este factor, como causa del golpe de Estado, presupone con simpleza que “la tercera fue la vencida”.

El 2 de marzo de 1982, cinco días antes de las elecciones, la empresa privada se pronunciaba por unas “elecciones honestas, pacíficas, libres y democráticas”. Señalaron además que “el régimen democrático se ha ido deteriorando a consecuencia de la acción de grupos terroristas apoyados por el imperialismo soviético y Cuba” (*Inforpress*, núm. 483: 8). El mismo día (2 de marzo), cuatro de los partidos que competirían en la justa electoral firmaban un acuerdo en el que se comprometían a respetar su resultado “en una elección libre y pura” (*Inforpress*, núm. 484: 2). Cuando los resultados fueron dados a conocer, se conformó una unidad de acción entre los partidos perdedores. El 8 de marzo éstos redactaron una carta dirigida al presidente Lucas García en la que señalaban, como evidencia del fraude, el uso de los recursos estatales en apoyo a la candidatura oficial, la manipulación de las actas y la incomunicación telefónica, y solicitaban: “pedir al Congreso de la República que se reúna para acordar la nulidad de las elecciones del 7 de marzo, a efecto de que usted esté en condiciones de convocar nuevamente al pueblo a unas elecciones generales que deben realizarse con todas las garantías de acatamiento de la voluntad del pueblo”.<sup>13</sup> El 9 de marzo, en una marcha de protesta, los firmantes se proponían hacer entrega de la carta al presidente de la República. No lo lograrían: fueron introducidos en vehículos de la policía, llevados a una comisaría y de allí trasladados –personalmente por el director de la Policía Nacional, coronel Germán Chupina Barahona– a la residencia de uno de los candidatos. *Inforpress* registra en los siguientes términos aquellas accio-

<sup>13</sup> Firman la carta, transcrita íntegramente en el reporte de *Inforpress* (485: 2): Gustavo Anzueto Vielman, Alejandro Maldonado Aguirre, Luis Alfonso López, Mario Sandoval Alarcón, Lionel Sisniega Otero y Roberto Carpio Nicolle.

nes: “fue notoria la debilidad de las protestas y la falta de fundamentación probatoria formal de esa aseveración [...] incapacidad o imposibilidad para movilizar opinión post-electoral y demostrar judicialmente (y aun políticamente) que había habido fraude” (485: 2).

Nadie logró convencer al presidente de la conveniencia de recibir a los manifestantes, aceptar sus argumentos y dirigirse al Congreso —que al día siguiente se reuniría para realizar la elección de segundo grado— para solicitar la nulidad del resultado electoral y la determinación de una nueva fecha para los comicios. Creo que éste fue un momento decisivo, que aquí se definió el rumbo de los acontecimientos que trece días después llegaron a concretarse frente al Palacio Nacional.

El 10 de marzo, los partidos de la oposición se reunieron —se indica en el reporte de *Inforpress* (484: 3)— con “representativos del sector privado con el fin también de examinar los sucesos y delinear la acción a seguir”. Para entonces, aquella unidad de acción había empezado a desgranarse: el candidato de la DC-PNR a la alcaldía, Álvaro Arzú, no aceptó renunciar al cargo. Después, la Central Auténtica Nacionalista (CAN) se retiró de la unidad de acción. Sus diputados votarían a favor de Guevara en la elección de segundo grado. Los 28 diputados del MLN y la alianza DC-PNR no fueron suficientes contra los 38 diputados que ampararon la victoria del partido oficial en las elecciones de segundo grado llevadas a cabo por el Congreso de la República el 10 de marzo. Aquel día, entre la decisión del Congreso y la reunión de los políticos con la élite económica, la posibilidad de una solución política se cerró.

En 1982, políticos y élites económicas creían aún que las elecciones generales podrían servir de mecanismo para el cambio de gobierno. Cuando se conocieron los resultados de las elecciones, apostaron por la posibilidad de una decisión del presidente. Cuando aquella posibilidad se cerró, la mañana del 10 de marzo, y se dieron cuenta de que otras acciones estaban en marcha, se asociaron a quienes mucho tiempo atrás decidieron que la mañana del 23 de marzo una batería de obuses 105-M56 debía estar apuntando hacia las oficinas de la presidencia. La mañana del 23 de marzo, comenta Gramajo en entrevista con J. Schirmer (2000: 50), en alusión a la participación de dos destacados miembros de la extrema derecha: “Sisniega Otero y Danilo Roca dijeron por el radio que era un golpe de ‘los oficiales jóvenes’. Acababan de inventar la frase ‘oficiales jóvenes’ [...] De modo que no había tal movimiento de oficiales jóvenes”. ¿Cuán útil fue —y sigue siendo, muchos años más tarde— lo de “oficiales jóvenes”, inventado en el correr de los acontecimientos, para legitimar el alzamiento?

A través de las memorias del general Gramajo Morales (Schirmer, 2000: 50), es factible establecer una relación entre el MLN y el general Ríos

Montt, quien se desempeñaba como jefe de asesores en asuntos de seguridad del candidato a presidente de aquella fuerza política. De tal suerte que el general Ríos habría sido comisionado para organizar el alzamiento, bajo la consigna de “¡si no ganamos las elecciones, tomemos el gobierno mediante un golpe!” Comentaré Gramajo: “desde muy temprano en la campaña electoral, los que apoyaban a Mario Sandoval para la presidencia, paralelamente estaban afanados en organizar un golpe de Estado, que ejecutarían en la eventualidad de que su candidato perdiera la elección” (1995: 158). No obstante ello, la decisión del jefe de Estado, general Efraín Ríos Montt, de dejar a un lado a los partidos políticos podría dar luces sobre el apoyo detrás del golpe de Estado del 23 de marzo. ¿Cómo traicionar a aquellos que apoyaban el alzamiento sin contar con otro socio, incluso más poderoso? ¿Cómo entender la decisión de apartar a los políticos del gobierno? ¿Cómo no fue a ellos a quienes se les ocurrió la idea, y quienes planificaron, organizaron y ejecutaron el golpe de Estado? Pero, en definitiva, ¿quién ganó el 23 de marzo? Obviamente, no el MLN, que el 24 de marzo de 1982 era un partido más. En el transcurrir de las horas de aquel día, el juego de lealtades y traiciones definió el curso de esa coyuntura.

El deseo del gobierno del general Lucas García, de “mantener la cordura para la tranquilidad del país y para la feliz culminación del proceso electoral”, no llegó a realizarse. Con apenas 12 días de anticipación, los que faltaban se aliaron a quienes ya meses antes habían establecido que después de las elecciones debía ocurrir un golpe de Estado. Para el día 10, las acciones del 23 de marzo eran una realidad. Estados Unidos y una parte de la oficialidad militar habían previsto la necesidad de dar un golpe de Estado a fin de desarrollar una forma de contrainsurgencia que, continuando con los logros ya alcanzados, suponía tres cosas que no podrían lograrse con el general Guevara en el poder: a) que el ejército anunciara su retiro de la función de gobierno; b) que, entre los partidos políticos “aceptados” por el ejército, debían realizarse elecciones libres; y c) que el régimen político debía parecerse lo más posible a un régimen democrático.

El 12 de diciembre de 1981, en una reunión informativa, comenta Gramajo Morales, el jefe de la Inteligencia Militar alertó al presidente Lucas García “acerca de los detalles de una conspiración en contra de las autoridades establecidas”. El jefe del EMP, Montalbán Batres, se expresó “en sentido contrario”, descartando los rumores. El jefe del EMG y hermano del presidente, Benedicto Lucas, “acusó a su jefe de inteligencia de pensamiento irracional debido a la tensión” (Gramajo, 1995: 163-164). Las suspicacias no lograron detener los preparativos del golpe. De haber atendido la recomendación del servicio de inteligencia militar, la historia probablemente sería distinta. Otro curso de acción se cerró. La explicación propuesta por

Jennifer Schirmer (2000: 50) se acerca a las ideas que aquí hemos seguido, cuando afirma: “Varios informantes, tanto civiles como militares, han asegurado que la CIA estaba profundamente involucrada alentando y financiando el golpe de 1982, que representaba ‘un acontecimiento fortuito’, dada la inestabilidad de la región tras la caída del general Somoza de Nicaragua en julio de 1979, la del general Romero de El Salvador en octubre de 1979 y el ‘caos’ del régimen de Lucas en 1981 [...] Una fuente declaró que él sabía que unos oficiales del MilGroup de los EE. UU., se habían acercado a dos jóvenes tenientes del servicio de transmisiones con dinero en efectivo y luego se pusieron en contacto con Sandoval Alarcón, líder del partido MLN. Estos tenientes y dos capitanes (incluido el hijo de Ríos Montt) fungirían como ‘inspectores’. Ejerciendo gran influencia dentro de la administración y desempeño de funciones de gobierno.”

Pero es preciso tomar en cuenta otro curso de acción. El 10 de junio de 1979, el general David Cancinos Barrios fue asesinado por una unidad urbana de la guerrilla. El jefe del EMG del ejército estaba apenas a 20 días de ser ascendido a ministro de la Defensa, el 1° de julio (DIA, 1979). Era una tradición que este cargo abriera el camino para la sucesión presidencial ¿Qué hubiera sucedido si el general Cancinos se presenta como candidato? ¿Cuánto hubiera variado el escenario? ¿Cuánta hubiera sido su receptividad para con las propuestas de Estados Unidos sobre la forma de hacer la guerra? ¿Qué hubiera sucedido si el fraude no se realiza y la oposición celebra su victoria en las urnas? ¿Cuán útil hubiera sido Mario Sandoval Alarcón, como presidente de la República, para la forma de contrainsurgencia que Estados Unidos creía que era la correcta para Guatemala y para la política estadounidense contra Nicaragua?

En 1980, un grupo de oficiales del Curso de Comando y Estado Mayor, impartido en el CEM, elaboran la *Apreciación estratégica del Estado guatemalteco*. Dicho trabajo incluía ciertas recomendaciones que fueron presentadas al alto mando militar, entre ellas: “Para convencer a los ciudadanos de que voten, es necesario garantizarles que su voluntad política expresada a través de urnas es un instrumento democrático muy poderoso que será respetado. Facilitaría el accionar del gobierno si no participa en las próximas elecciones un oficial militar como candidato a presidente” (CEM, 1981). Alfonso Yurrita comenta que la *Apreciación* “originó discrepancias con los oficiales de la ‘línea táctica’, con la consecuencia de que muchos de los de la ‘línea estratégica’ fueron demeritados en sus funciones” (Yurrita, 1997: 123). ¿Qué hubiera pasado si la recomendación es finalmente atendida? A pesar de que aquello no sucedió y de que lo que se diga no es más que un juego, el descubrimiento de tales relaciones y cursos de acción coadyuvan a hacer inteligibles los acontecimientos.

*El gran jugador: Estados Unidos*

Más que un efecto de la era Carter, las decisiones del Congreso de Estados Unidos en relación con la política hacia Guatemala estuvieron determinadas por el uso de ciertas potestades, por parte del Congreso, de supervisión e investigación.<sup>14</sup> A ello es preciso agregar otro dato: al tanto de las intenciones de Guatemala de preparar acciones militares contra Belice, Inglaterra logró que Estados Unidos cancelara la venta de aeronaves C-47 a Guatemala en 1975 (DIA, 1979). Éste fue el principio de una tensa relación que cinco años más tarde se rompió. En 1974, la Ley de Asistencia Externa en Materia de Seguridad y Control de la Exportación de Armamento fue modificada, para establecer la prohibición de incluir, entre los receptores de ayuda, a países que violaban los derechos humanos. En 1976, se sumó a la cláusula modificada en 1974 la necesidad de que el Departamento de Estado elaborara un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en los países incluidos en el programa de asistencia.<sup>15</sup>

La política de Estados Unidos hacia Guatemala entre 1977 y 1982 se parece a un camino que se recorre en un ir y venir. El punto crítico del primer ciclo ocurre en abril de 1977, cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Molina Orantes, califica el informe de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado de “inaceptable intervención en los asuntos internos de otros Estados [...] algo que es totalmente inadmisibles entre dos Estados soberanos” (Fajardo, Andrade y Villagrán, 1997). Previamente, Guatemala se sumó a la decisión de varios países de América Latina de rechazar la ayuda militar de Estados Unidos. No obstante, a finales de 1977, Guatemala intentó adquirir aeronaves F-5. La petición de compra fue denegada. A finales de 1978, Guatemala intentó adquirir aeronaves T-34. Ante la posibilidad de otro rechazo, la compra no se dio y en cambio Guatemala adquirió aeronaves Pilatus PC-7, construidas en Suiza (DIA, 1979). Tal vez mucha de la visión del gobierno, de las fuerzas armadas y de la extrema derecha esté reunida en el análisis que Roberto Alejos, de la Fundación Libertad, hiciera de aquel momento: “Probablemente muchos en el Departamento de Estado son pro-comunistas, ellos están usando

<sup>14</sup> El escándalo Watergate, que puso término al periodo presidencial de Richard Nixon, y la reacción del Congreso frente al desempeño de Estados Unidos en la guerra de Vietnam marcaron, en aquel contexto, las relaciones entre la Casa Blanca y el Congreso. Michael McClintock (1985) recuerda cómo uno de los primeros debates sobre la política de Nixon hacia gobiernos que practicaban –en opinión del congreso de Estados Unidos– el terrorismo de Estado sería recuperado posteriormente.

<sup>15</sup> Más que un resultado legislativo concreto, lo que aquellas audiencias permitieron fue que los congresistas escucharan testimonios sobre las atrocidades cometidas por los gobiernos militares, lo que sentó las bases del informe de 1977.

los derechos humanos como un argumento para promover la socialización de estas áreas. Hemos dado en el punto ahora que tememos al Departamento de Estado más que a la infiltración comunista. Puede que el Sr. Carter sea un presidente totalmente incapaz o puede que sea un elemento pro-comunista” (Nairn, 1989). El presidente Lucas García se refería al presidente de Estados Unidos como “Jimmy Castro” (Nairn, 1989).

En 1978, el presupuesto ya no incluía a Guatemala en la lista de países beneficiarios del programa de ventas militares (Foreign Military Sales, FMS), y reducía su participación en el programa de entrenamiento militar (Foreign Military Education and Training, FMT), del que sería suspendido en 1979. Finalmente, las ventas comerciales fueron también canceladas en 1980, como consecuencia de los sucesos ocurridos en la embajada de España en Guatemala.<sup>16</sup>

La vuelta, o más bien, el segundo ciclo emerge a finales de 1981, cuando el Partido Republicano gana la presidencia de Estados Unidos. La noche del 4 de noviembre se festejó en las calles de Ciudad de Guatemala el triunfo republicano. A partir de aquel momento, se inicia un forcejeo entre el Congreso y la Casa Blanca y distintas agencias gubernamentales (el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la CIA, entre otros). A diferencia del Congreso, todos se pronuncian por la reanudación de la ayuda militar a Guatemala. El ex presidente de Estados Unidos, James Carter, confirma el cambio que se operó con la entrada del Partido Republicano en la Casa Blanca, en enero de 1981: “Cuando fui derrotado por Ronald Reagan y él asumió la presidencia en 1981, lo primero que hizo fue enviar a su representante ante la ONU a Argentina y Chile para decirle a los líderes de esos países que la política Carter de derechos humanos se había acabado [...] Jeanne Kirkpatrick fue la enviada para decirle a los dictadores que se acababan los ataques por asuntos de derechos humanos” (Carter, 1997). No obstante ello, Fajardo, Andrade y Villagrán concluyen el capítulo correspondiente a las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos durante el régimen del general Ríos Montt advirtiendo que “la preocupación por los derechos humanos, latente en cierta medida por los problemas de esta región, continuó siendo un asunto importante en la política exterior estadounidense, aunque el estilo y las modalidades de su ejecución fueron diferentes a las de la administración de Carter” (1997: 185).

Este viraje y sus alianzas se prepararon años atrás. En diciembre de 1979, el gerente en Guatemala de la Coca Cola, John C. Trotter, organizó la visita al

<sup>16</sup> Las fuerzas de seguridad quemaron vivas a 39 personas que habían ocupado la sede diplomática el 31 de enero de 1980, en protesta por la represión política. Las acciones de 1979 y 1980 fueron referidas el 14 de mayo de 1993 por Bruce Cameron, gestor y “lobbista” en el Congreso de Estados Unidos, en entrevista con Fajardo, Andrade y Villagrán (1997: 182).

país de varios asesores del entonces candidato Ronald Reagan. Entre ellos, los generales retirados John K. Singlaub y Daniel Graham, ex director de la DIA. La visita incluyó reuniones con el presidente Lucas García y recorridos en helicóptero por las áreas de conflicto. Singlaub afirmaría posteriormente, en una entrevista, que estaba sumamente impresionado por la forma como el gobierno de Guatemala “trataba desesperadamente de promover los derechos humanos”. En tanto que Graham afirmará que “le dijo al presidente Lucas García que a su retorno a los Estados Unidos, advertiría al equipo de campaña de R. Reagan de la necesidad de restablecer la ayuda militar a Guatemala tan pronto como R. Reagan gane las elecciones y se instale en la Casa Blanca” (Nairn, 1989). En la primavera de 1980, el entonces candidato Ronald Reagan se reunió en California con Eduardo Carrete, de la Asociación de Amigos del País, una agrupación de la derecha guatemalteca. El objetivo de la reunión era parte de un trabajo de *lobby* para hacer que la prohibición de la venta de armas a Guatemala fuera eliminada (Nairn, 1989). Las gestiones pugnaban por “sacar a Guatemala de la lista negra”, permitiendo la venta de armamento y el entrenamiento de personal, dejar de criticar la política del gobierno guatemalteco en materia de derechos humanos y, en caso necesario, intervenir militarmente si el ejército perdía la guerra (Nairn, 1989).

Para el nuevo gobierno de Estados Unidos, que había tomado posesión el 20 de enero de 1981, Centroamérica era un importante campo de batalla de la Guerra Fría.<sup>17</sup> El 19 de julio de 1979, en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había derrotado a la Guardia Nacional del dictador Somoza. En El Salvador, el FMLN había dado inicio en 1981 a lo que llamaban “la ofensiva final” contra las fuerzas armadas de aquel país.<sup>18</sup> Mientras ello era así, el jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos ponía de relieve en el *New York Times* (22, VIII, 1982) la situación en Guatemala: “su población es mayor, la economía es más fuerte, su posición geográfica está localizada más críticamente en el sentido estra-

<sup>17</sup> Un memorando secreto, que W. Casey, director de la CIA, presentó en marzo de 1981 al presidente Reagan (NSA, 1987: 6-7) detalla como asuntos de máxima prioridad: la revolución nicaragüense (19, VII, 1979), la invasión soviética a Afganistán (24, XII, 1979) y la revolución iraní. Libia, Granada, Cuba, Laos y Camboya figuraban como otros países en los cuales se debía poner atención.

<sup>18</sup> A finales de 1981, el ambiente en Washington por la guerra en El Salvador era dramático. El reporte de *Inforpress* (483: 1) da cuenta de la evaluación que realizaron funcionarios de alto nivel. El secretario de Estado, Alexander Haig, declaró que “si fuera necesario ‘se pelearía nuevamente la guerra de Vietnam’ para demostrar a la URSS la supremacía estadounidense”. En las mismas fechas, el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, señaló que “los guerrilleros debían ser derrotados y que el gobierno del presidente Reagan haría ‘lo que fuera necesario’ para evitar que la junta salvadoreña cayera”. El secretario de Estado adjunto, Walter Stroessel, anunció que “no se descartaba una intervención militar”.



tégico. Las implicaciones de un triunfo marxista en Guatemala son mucho más serias que en El Salvador”.

La estrategia de Estados Unidos para la región se basaba en reformar los regímenes políticos. Extrayendo las lecciones de la derrota en Vietnam, la tesis consistía en poner atención a la legitimidad de los regímenes socios. En tal escenario, los corruptos, que se sustentaban en fraudes electorales, que no lograban relacionarse con un grupo “controlado” de partidos políticos y con las élites económicas, eran regímenes que no servían para los propósitos de la guerra. Esto se condensa en el siguiente párrafo: “La intervención militar estadounidense en auxilio de una élite gubernamental o de su sistema político que no tiene un mínimo nivel de apoyo interno, probablemente erosionará cualquier apoyo público existente [...] esto significa que la intervención estadounidense debe ser política y militarmente equilibrada, principalmente en lo concerniente al esfuerzo de legitimación del régimen existente” (Sarkesian, 1981: 7-8).

Tal era la voluntad de la Casa Blanca de apoyar a Guatemala, que la primera acción del gobierno republicano fue –contraviniendo disposiciones del Congreso– restablecer el programa de entrenamiento de pilotos aviadores y autorizar la venta de vehículos militares de transporte (camiones y jeeps) y de repuestos para helicópteros. En aquella oportunidad la ayuda ascendía a \$3 200 000. Para lograr su cometido, debió modificarse una ley que establecía el tipo de productos militares que podían ser objeto de sanción por parte del Congreso (U. S. Congress, 1981). Aunque ya tarde, éste reparó en el hecho, lo que provocó un escándalo.

Pero el suministro de armas podría hacerse a través de un intermediario: Israel. Ya desde 1977 Israel se había convertido en el mayor expendedor de armas para Guatemala (Rubenberg, 1986: 20).<sup>19</sup> Diversas fuentes confirman que a principios de 1982 había en Guatemala alrededor de 300 asesores israelíes para tácticas de contrainsurgencia. En la edición del 17 de agosto de 1983 del *Washington Post* puede leerse: “Asesores israelíes –algunos oficiales, otros privados– ayudan a los agentes de las fuerzas de seguridad guatemaltecas a cazar a miembros de los grupos rebeldes” (Rubenberg,

<sup>19</sup> Las buenas relaciones entre Guatemala e Israel se remontan al momento mismo en que Naciones Unidas aceptó la creación del Estado de Israel. El embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, Jorge García Granados, entre 1947 y 1948 promovió esta causa (García-Granados, 1948; Curtis y Gitelson, 1976). En 1971 se iniciaron las relaciones militares, con un acuerdo de cooperación (Kaufman, Shaphira y Barromi, 1979: 107, 118). En 1977, el director del INTA (Instituto Nacional de Transformación Agraria), coronel Fernando Castillo Ramírez, visitó Jerusalén. Inmediatamente después, asesores israelíes llegaron al municipio de Ixcán, Departamento de El Quiché –en aquel entonces era una zona de guerra–, para desarrollar programas de acción cívica (Black, 1983: 45). Entre 1978 y 1979 Israel entrenó a mil guatemaltecos en programas de acción cívica (Rubenberg, 1986: 18).

1986: 20). El jefe de EMG después del golpe de Estado, general Héctor Mario López Fuentes, resume la relación con Israel en estos términos: “Israel es nuestra fuente principal de armas y el amigo número uno de Guatemala en el mundo” (Rubenberg, 1986: 21). Pero Estados Unidos no se halla fuera de tan buenas relaciones. En noviembre de 1981, se firma un memorando de entendimiento. En él, Estados Unidos acordaba que los países del Tercer Mundo podrían –con recursos otorgados por Estados Unidos– adquirir armamento de Israel. Posteriormente, en noviembre de 1983, Israel propone servir como canal de la ayuda de Estados Unidos a fuerzas anticomunistas en Centroamérica, creando para ello un fondo independiente de los presupuestos gubernamentales de Estados Unidos para financiar proyectos implementados por “expertos israelíes” (*The Miami Herald*, 1982; *The New York Times*, 1984; *The Washington Post*, 1984). Es en este contexto en el que cobra sentido un cable secreto dirigido a Washington en 1983 por el embajador de Estados Unidos en Guatemala. En dicho cable se advierte: “tenemos razones para creer que nuestros buenos amigos de Israel están preparados, o casi lo están, para ofrecer cantidades sustanciales de equipo militar al gobierno de Guatemala en condiciones crediticias más allá de los veinte años. No había tomado en cuenta la importancia de hacer préstamos a Israel, siempre y cuando éste pueda hacer lo mismo en nuestro patio trasero” (Bigwood, 2003). En términos similares se pronunciaría Oliver North, asesor del Consejo Nacional de Seguridad, cuando en 1983 escribió un memorando en el que se lee: “Como hable con usted ayer, solicité a la CIA, al Departamento de Defensa y al Departamento de Estado que sugieran asistencia práctica que los israelíes pueden ofrecer a Guatemala y a El Salvador” (Bigwood, 2003). Cuando el deseo de cooperar es genuino, los medios no importan. Si una posibilidad está cerrada, se buscará otras. En la realidad de los hechos Guatemala nunca dejaría de contar con el apoyo del gran aliado.

El 10 de julio de 1981, Frank Ortiz, embajador de Estados Unidos en Guatemala, renuncia a su cargo. Será reemplazado por Frederic L. Chapin. Originario de New Jersey, Chapin llegó a Guatemala el 3 de septiembre de 1981. Dejó el cargo el 28 de febrero de 1984, siete meses después del golpe de Estado que había derrocado al general Efraín Ríos Montt.

En otra maniobra que fue parte del cambio operado por el gobierno republicano en la Casa Blanca, en mayo de 1981, el presidente Reagan envió a Vernon Walters a Guatemala. Este funcionario de primer nivel tuvo por misión convencer al presidente Lucas de la nueva forma de librar la guerra interna, a la vez que demandó el compromiso de Guatemala para con la estrategia regional contra la Nicaragua sandinista.<sup>20</sup> En la misma visi-

<sup>20</sup> El general V. Walters fue subdirector de la CIA entre 1972 y 1976. Estuvo presente en Irán, cuando el golpe de Estado de 1953, y en el golpe de Estado ocurrido en Brasil en 1964.

ta de Walters, estaba previsto que el capitán de navío de los Estados Unidos Jean Thurber se reuniera con el jefe del EMG, Benedicto Lucas García.<sup>21</sup> Acerca de las interioridades de aquella cita, existe una sola referencia conocida: un memorando que Robert L. Jacobs (1981), de la oficina de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado, dirige el 5 de octubre de 1981 a “Einaudi”.<sup>22</sup> La base del memorando es el reporte que de la reunión elaboró el embajador Frederic L. Chapin. Jacobs concluye que “los esfuerzos del general Walters para persuadir al presidente Lucas de que la represión sólo extenderá el contagio guerrillero fueron, evidentemente, infructuosos”. A pesar de ello, considera: “tenemos que decidir si las ‘consideraciones de seguridad nacional’ requieren que, de todos modos, sigamos adelante con la asistencia de seguridad”. Este funcionario intenta convencer a “Einaudi” de lo inapropiado que sería apoyar al gobierno de Guatemala y que esto dependería de si la guerrilla constituía una amenaza de corto, mediano o de largo plazo.

---

Entre 1977 y 1981 fue consultor de Basic Resources Services, una de las primeras compañías que explotó petróleo en Guatemala (Smith, 2002). Durante la administración republicana fue embajador itinerante, y formó parte del Central American Policy Group, un equipo integrado por distintas agencias para definir y ejecutar la política de Estados Unidos hacia esta región. El equipo estaba compuesto por los titulares de los departamentos de Estado, Justicia y Defensa; el director de la CIA William Casey; el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional; y el jefe del Estado Mayor Conjunto David Jones. Coordinaban el equipo: Robert McFarlane, asesor del Consejo Nacional de Seguridad (desde 17, X, 1983 hasta 30, XI, 1985), Thomas O. Enders (desde 12, VII, 1981 hasta 27, VI, 1983) y Langhorne Motley (desde 12, VII, 1983 hasta 3, VII, 1985), asistentes para asuntos interamericanos del Departamento de Estado. También acudían a las sesiones Stephen W. Bosworth, segundo asistente para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado; James Michel, asesor legal del Departamento de Estado; el general Paul Gorman, jefe del Comando Central; Myles Frechette, de la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado; coronel Oliver L. North, asesor de asuntos militares en el Consejo Nacional de Seguridad; Néstor Sánchez, jefe de Operaciones de la CIA para América Latina, y posteriormente asistente para Asuntos Interamericanos del Secretario de Defensa; y Duane “Dewey Marioni” Clarridge, sucesor de Sánchez en la CIA (desde VIII, 1981). El equipo interagencias, célebre tras el escándalo Irán-contras, era conocido con diferentes nombres: Core Group, Restricted Interdepartmental Group y Thursday Afternoon Club (NSA, 1987).

<sup>21</sup> Edgar Chamorro (1985), encargado de relaciones públicas del Frente Democrático Nicaragüense, FDN, declaró en la Corte Internacional e Justicia de La Haya (5, IX, 1985) que en agosto, en Ciudad de Guatemala, se dio otro encuentro entre el general Walters y dirigentes de la contra nicaragüense, con el objetivo de “integrar a la antigua Guardia de Somoza con los contras y que oficiales del ejército de Argentina sirvieran de asesores y capacitadores (quienes fueron luego reemplazados por personal de la CIA)”.

<sup>22</sup> Presumiblemente se trata de Luigui Einaudi, secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (2000-2005). Entre 1977 y 1989, lapso en el que se redactó el memorando en cuestión, fue director de Planificación de Políticas de la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La suerte del gobierno del general Lucas García se definió en aquella reunión. Con el resultado de la visita del general Vernon Walters a Ciudad de Guatemala el único camino que podía transitarse era el del golpe de Estado. El general Lucas y los oficiales a su alrededor no lograron comprender que, al no aceptar los términos colocados sobre la mesa por Walters, serían removidos de sus cargos por sus propios compañeros de armas. Ante la posición del Congreso de Estados Unidos de no permitir ningún tipo de ayuda militar y la situación que se vivía en los países vecinos, Nicaragua y El Salvador, el nuevo gobierno estadounidense necesitaba en Guatemala un régimen que pudiera “presentar” ante el Congreso como digno de ayuda, y que a la vez fuera útil para contrastar la “democracia en Centroamérica” con la revolución sandinista. Cualquier resultado proveniente de las urnas, el 7 de marzo de 1982, no lograría cumplir con este requisito. Ni la continuidad de la cúpula gobernante, con la victoria del general Guevara (con el fraude o sin él), ni la victoria del candidato de oposición, Mario Sandoval Alarcón, del MLN, lograrían “destrabar” la ayuda militar que, en razón de Estados Unidos, Guatemala necesitaba. Incluso, esta última opción se complicaba aún más por la afinidad que el Partido Republicano tenía con el líder del “partido de la violencia organizada”, como se denominaba al MLN. Una organización que incluía dentro de sus estructuras a escuadrones de la muerte, unidades paramilitares encargadas del terror.<sup>23</sup> Eso responde al interrogante de por qué no era posible aprovechar las elecciones de 1982 para enrumbar el proceso de liberalización del régimen. Por qué para Estados Unidos la solución electoral estaba cerrada, se produjera o no el 7 de marzo un fraude electoral en Guatemala. Las elecciones no podían controlarse porque no eran útiles para desarrollar la guerra.

<sup>23</sup> Sandoval Alarcón fue presidente del Congreso entre 1971 y 1974; vicepresidente de la República entre 1974 y 1978, y jefe de campaña del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978), cuando el general Efraín Ríos Montt, mediante un fraude electoral, perdió la presidencia de la República. También fue jefe de campaña del general Enrique Peralta Azurdía (1978), quien perdió las elecciones frente al general Fernando Romeo Lucas García. La relación entre el MLN y el Partido Republicano data de muchos años atrás, cuando en la Liga Anticomunista Mundial (World Anticommunist League, WACL), de la que Sandoval era líder, se daban cita personalidades clave del mundo de la derecha estadounidense que regresó a la Casa Blanca con Reagan. En 1979, John Singlaub y Daniel Graham, del Consejo Americano de Seguridad, fundadores de la sección en Estados Unidos de la Liga Anticomunista Mundial, sostuvieron una serie de reuniones en Guatemala para presentar las ideas que la administración de Reagan podría llevar a cabo al momento de ganar las elecciones. Sandoval Alarcón fue invitado a los actos de toma de posesión de Reagan en enero de 1981. La Liga Anticomunista Mundial se fundó en 1966 en Taiwan. La sección para América Latina de la Liga se llamó Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL). Sandoval Alarcón fue declarado líder anticomunista mundial en la X Conferencia de la Liga, realizada en Taiwan; y conductor mundial del anticomunismo en el XIV Congreso Mundial Anticomunista celebrado en Taiwan, en agosto de 1981. Para más detalles, consúltese Anderson y Lee (1986).

Con sólo dos excepciones, El Salvador y Guatemala, es factible establecer un patrón de liberalización de los regímenes políticos en América Latina entre finales de los setenta y principios de los ochenta: en éste, el alto mando del cuerpo de oficiales toma la decisión de retirarse de la acción de gobierno.<sup>24</sup> Sólo en estos dos casos fue preciso un golpe de Estado para que la ruta de la liberalización del régimen fuera seguida. Chile escapa a tales comparaciones, dado que su transición dará inicio años más tarde. En Guatemala, Estados Unidos encontró a un grupo de oficiales que no estaba dispuesto a librar la guerra de la forma como el vecino del norte proponía. Para dar inicio al proceso de transición a la democracia, desde el régimen autoritario, fue preciso hacer algunos ajustes en el seno de las fuerzas armadas.

Sabiendo de antemano que el terror continuaría, y que incluso se haría más agudo, varios funcionarios de Estados Unidos se lanzaron a una campaña de pronunciamientos a favor del nuevo gobierno que resultó del golpe de Estado. Ésa fue la línea que Estados Unidos siguió después del golpe. Antes que un efecto de las expectativas creadas por el cambio y el discurso que pronunciaban los líderes de la asonada, aquello era un cálculo para modificar voluntades en el Congreso. No obstante, Fajardo, Andrade y Villagrán describen así aquella escena: “La reacción positiva de la población ante este hecho, y el optimismo inicial que manifestaron diversos sectores en el país, generaron expectativas favorables en Estados Unidos sobre el futuro de las relaciones con Guatemala” (1999: 183).<sup>25</sup> El 15 de abril de 1982, tres semanas después del golpe de Estado, el embajador Frederic Chapin comprometió alrededor de 50 millones de dólares de ayuda. Anunció públicamente: “Los asesinatos se han detenido [...] El gobierno de Guatemala sale de la oscuridad a la luz.”<sup>26</sup> También el 15 de abril, el Departamento de Estado anunció su disposición a que la prohibición de ventas militares fuera levantada (Parry, 1999). Ya en agosto de 1982, el asistente para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Thomas O. Enders, advirtió que

<sup>24</sup> Por ejemplo: Perú (VII, 1977), cuando los militares anuncian su retiro del gobierno y convocan a una Asamblea Nacional Constituyente (VI, 1978), para luego celebrar elecciones presidenciales (V, 1980); en Brasil (1979), cuando los militares anunciaron el inicio de un proceso de reforma electoral que culminó en enero de 1985 con el triunfo de Tancredo Neves; en Honduras (IV, 1980), cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente, proceso que concluye con las elecciones de noviembre de 1985; en Argentina (X, 1983), con la realización de las elecciones que dan por ganador a Raúl Alfonsín; en Uruguay (XI, 1984), con las elecciones en las que resulta triunfador Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado.

<sup>25</sup> No es de extrañar que al evaluar el otro golpe de Estado, ocurrido en agosto de 1983, dijieran que “ponía de manifiesto, una vez más, lo limitado de la influencia del gobierno de aquel país en relación con Guatemala” (Fajardo, Andrade y Villagrán, 1997: 185).

<sup>26</sup> En privado, en un memorando dirigido al Departamento de Estado, el embajador se pronunció sobre “las horribles realidades de los derechos humanos en Guatemala” (Parry, 1999).

“en Guatemala, un golpe de Estado ha instalado en el gobierno a un nuevo líder que ha mejorado la situación de los derechos humanos y ha abierto el camino para una contrainsurgencia más eficaz” (Parry, 1999). El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de 1982 afirmaría: “La conducta general de las fuerzas armadas ha mejorado a fines del año...” (Parry, 1999). Incluso, el presidente Reagan se entrevistó con Ríos Montt en Tegucigalpa, Honduras, el 4 de diciembre de 1982. Éstas fueron las palabras pronunciadas en aquel encuentro por Reagan para calificar al jefe de Estado de Guatemala: “Es un hombre de gran compromiso e integridad personal, totalmente consagrado a la democracia [...] y francamente, me siento inclinado a creer que lo están calumniando. Su país enfrenta el reto brutal de una guerrilla sostenida por otros que se encuentran fuera de Guatemala”. Hasta los últimos días del régimen de Ríos Montt, funcionarios del gobierno de Estados Unidos se empeñaban en pronunciarse de manera favorable. En junio de 1983, el enviado especial Richard B. Stone elogió “los cambios positivos” de aquel gobierno (Parry, 1999).

Finalmente, la ayuda se desbloqueó, aunque de forma mínima y lenta. Fajardo, Andrade y Villagrán señalan que el 7 de enero de 1983 “la administración reanudó algunos programas de ayuda económica y negoció con el Congreso un programa inicial de US \$6 millones destinados al campo militar (los que, finalmente, fueron desembolsados a finales de 1984)...” (1997: 184). El envío incluía repuestos para helicópteros UH-1H y aeronaves A-37.

Con el golpe de Estado de 1982, Estados Unidos intentó cerrar el ciclo que la operación éxito (PBSUCCESSFULL) abrió, cuando a las 21:15 horas del 27 de junio de 1954 el presidente Jacobo Arbenz Guzmán anunció su renuncia en cadena radial. Desde aquel momento —en ello reside la idea del ciclo— la política empezó a ser vista como un recurso más. En adelante estaría acompañada de la fuerza de las armas contra los comunistas o quienes a ellos se asemejaban. Es ésta una verdad con menos brío, menos presentable: la democracia y el orden burgués contemporáneo tienen como punto de emergencia una operación encubierta. Ésta toma forma ante la incapacidad de un grupo de oficiales —aquellos que rodeaban a Lucas García— de entender que la guerra debía hacerse con elecciones y derechos humanos; con los militares en el poder, pero ya no en el gobierno. Las exigencias de Estados Unidos no fueron comprendidas, ni bien recibidas. Entonces, éste preparó a un pequeño grupo de oficiales para que llevara adelante el alzamiento militar. En un telegrama secreto de la DIA (1983) se lee: “El golpe de Estado contra el general Romeo (Lucas) García en marzo de 1982 fue perpetrado por jóvenes oficiales sin el consentimiento, y ni siquiera el conocimiento de la mayoría de los oficiales de alto rango. Este golpe no tenía el apoyo de nadie más allá del pequeño grupo

de oficiales jóvenes que lo organizó [...] el único 'grupo' que apoya a este régimen es el compuesto por su mujer y los veintidós oficiales jóvenes que instigaron el golpe, y todos están emparentados con Ríos-Montt." Estados Unidos apoyó de forma decisiva aquel experimento de gobierno, violando incluso la restricción del Congreso en cuanto al suministro de ayuda militar. Intentó presentarlo como un cambio a favor de la democracia y los derechos humanos, en medio de los juegos de poder entre la Casa Blanca y el Congreso. Cuando en el año 2000 le preguntaron a Francisco Gordillo, uno de los miembros del triunvirato del 23 de marzo, acerca de las razones del golpe, éste contestó: "El interés del sector económico y de la embajada de los Estados Unidos, para que un partido político (MLN) y un grupo de oficiales se alzarán" (*Prensa Libre*, 2000).

#### Y AHORA... EL ORDEN POLÍTICO

Al día siguiente del golpe de Estado, el 24 de marzo, la junta militar declaró la nulidad de las elecciones realizadas el 7 de marzo (decreto 1-82). El mismo día disolvió el Congreso (decreto 2-82) y determinó la suspensión de la Constitución (decreto 3-82). Durante la primera semana de abril, el jefe de Estado se reunió con representantes de los partidos políticos para ofrecerles la oportunidad de revisar la ley electoral en un plazo de noventa días. De lograr un acuerdo unánime, la convocatoria a elecciones se realizaría en otro plazo de noventa días. De no ser así, el jefe de Estado conformaría su propio equipo revisor. En este segundo escenario las elecciones podían postergarse hasta año y medio después de integrado dicho equipo (DIA, 1982). Esta reunión, referida en telegrama confidencial de la DIA constituye la primera piedra del nuevo orden político. La guerra moldeaba, se introducía en la política.<sup>27</sup> Dos meses después, el 9 de junio, el general Efraín Ríos Montt disolvió el triunvirato y se proclamó presidente de la República. Más tarde, el 8 de agosto de 1983, fue depuesto en una reunión del alto mando militar. McClintock (1985: 238) apunta que el líder del golpe de Estado, general Óscar Humberto Mejía Víctores, sostuvo el día 7 de agosto una reunión con el subjefe del Comando Sur y los jefes de las fuerzas armadas de Honduras y El Salvador. La revista *Time*, en su edición del 22 de agosto de 1983, da cuenta de la presencia, en los alrededores del Pa-

<sup>27</sup> El telegrama de la DIA termina señalando lo siguiente: "Cuando los representantes políticos ya se habían retirado del lugar, se dice que el general Ríos confió a uno de sus asesores personales que él estaba seguro que los partidos políticos jamás podrían dejar de lado sus recelos/ambiciones personales a fin de concebir una nueva ley electoral que sería del agrado de todos. Por lo tanto, le tocaría a él [Ríos] organizar un comité y supervisar el proyecto."

lacio Nacional, del mayor del ejército de Estados Unidos William McArdoe, quien utilizaba un aparato de comunicación en momentos en que este otro golpe de Estado estaba llegando a su fase decisiva (McClintock, 1985: 238). Este otro gobierno de facto emitió la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (decreto ley núm. 30-83), la Ley del Registro de Ciudadanos (decreto ley núm. 31-83) y la Ley de Organizaciones Políticas (decreto ley núm. 32-83). Estos actos fueron complementados el 19 de enero de 1984 por la convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (decreto ley núm. 3-84). En este mes y año se organizaron dichas elecciones. Se inscribieron 17 partidos y tres comités cívicos electorales. En total participaron 1 174 candidatos para ocupar las 88 curules. El jefe de Estado instaló la Asamblea Nacional Constituyente el 1° de agosto. Aunque la nueva Constitución entró en vigor hasta enero de 1986, se promulgó el 31 de mayo de 1985. La democracia estaba en flor, la guerra continuó.

#### ANOTACIONES FINALES

Ha llegado el momento de colocar lo hasta aquí dicho bajo el implacable examen del bisturí. Retirar capas de la narración, palpar el estado de las fuentes y los datos, la coherencia en la secuencia de los hechos, la selección de evidencias (huellas), las reconstrucciones, las interpretaciones, el análisis del papel de los actores y, finalmente, los presupuestos que animaron lo que se hizo, con los cuales se tensó el relato. Auscultar aquello que sirvió para dar forma a la trama aquí contada. He pretendido romper algo. Lo escrito sobre 1982 daba la ilusión de que nos proporcionaba las respuestas para comprender el golpe de Estado. Ello se basaba en el sentido de las preguntas. Qué fácil es ignorar que ignoramos. Al revés, creo haber descubierto otras respuestas. Pero, más importante que eso, creo haber bosquejado otras preguntas.

La trama se rebela en su esplendor. Pero, como siempre, más allá de las falsas seriedades, por debajo de la superficie del relato hay agujeros mal remendados, zonas oscuras, argumentos débiles, fragmentos de difícil comprensión, descripciones de distinto nivel, desplazamientos a veces apresurados hacia la interpretación. ¿Cómo dotar de cierto orden a un conjunto de hechos sin que tenazmente nos recuerden su yuxtaposición y entrecruzamiento? Como todo análisis sociohistórico, éste no tiene por qué no ser difícil, intrincado, desconcertante y parcial. Dudo del relato que al escribirse no angustia ni apasiona. Por eso, no hay aquí una guía sencilla, agradable y ligera, al estilo de que lo que tenía que suceder acabó sucediendo. Más aún, no sólo fijé mi atención en los hechos finalmente ocurridos, también intenté indagar sobre las posibilidades abortadas. De esa forma, una multi-



tud de historias posibles atraviesa los acontecimientos explicados. Al indagar en éstas, se descubre la fragilidad de los cursos finalmente seguidos, el carácter de las decisiones, los fines, el azar y las causas.

Fue el de la intriga el hilo con el que intenté amarrar causas, fines y azares. Condiciones y determinantes se encuentran a la par de razones y accidentes. Pero no se trata de ver las causas como el subsuelo o la camisa de fuerza desde donde se acotan los fines bajo la sorpresa del azar. Sería demasiado bello. Desde la intriga di forma a la idea de la participación del gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado. Desde donde demostré cómo el determinismo de los “análisis de clase social” dotan a los actores de cierta capacidad que aquí no fue observable. La “coalición dominante” no dispuso de esa capacidad sobrenatural para preverlo todo. Hasta nosotros llegó la historia de las razones contadas como causas. Creo haber demostrado la fragilidad de éstas. No obstante, es innegable que algún papel desempeñaron en aquella coyuntura. Sin la guerra, el fraude electoral, la corrupción, el fin del crecimiento económico, seguramente la historia sería otra. Pero entre esta afirmación y la confianza en que fueron éstas las causas del alzamiento existe un profundo abismo. Hay certezas que sumergen (ahogan) otras explicaciones. Fue preciso incendiar esas certezas.

Pero al final ¿con qué nos quedamos? Con una nueva explicación que redimensiona aquellas causas o razones, a partir del relato de los acontecimientos. Creo haber establecido nudos de relaciones entre actores –agentes reales antes que categorías abstractas– en torno a la secuencia de acontecimientos que culminaron con la decisión del presidente Lucas García de dimitir del cargo el 23 de marzo de 1982. Múltiples relaciones de fuerza que no se captan con una deducción simplista. El alzamiento no se explica por sí mismo fuera de una tupida red de pequeños accidentes, posibilidades abortadas, sucesos, razones de unos y otros, un conjunto que se complementa y contradice. En adelante, desde el 24 de marzo, aquel acontecimiento empezó a ser integrado, de forma más o menos coherente, en una estrategia global que reajustó, reforzó, transformó y paulatinamente fue dando sentido –para aprovechar y utilizar– al hecho concreto de establecer un gobierno de facto. No creo que la sola decisión de Estados Unidos fuera suficiente para provocar el alzamiento. Aquel hecho no resiste explicaciones monocausales, emparentadas con la vieja interpretación para la cual Estados Unidos es el demiurgo de la historia de América Latina. Sin aquellos factores –me refiero a las razones debatidas–, el golpe de Estado no hubiera sido siquiera considerado. No obstante, al incorporar la participación de Estados Unidos y realizar un balance crítico de las razones hasta ahora presentadas como causas, los hechos encajan en una explicación diferente. Es esto lo que aquí logré hacer. En suma, creo que se trata de la forma como

las piezas que explican aquel hecho son colocadas. Hasta ahora, esta pieza –la participación de Estados Unidos– había estado fuera del tablero.

¿Es ésta una genealogía? No, creo que se apenas se trata de un boceto. La pretensión inicial de “hacer una genealogía del orden burgués contemporáneo que emergió en 1982” tendrá que esperar algún tiempo más. He cubierto de forma parcial ciertas aristas de lo que sería la genealogía de aquel orden. Quizá lo más importante fue tomar los hilos de la trama desde su revés. Antes que volver a demostrar lo hasta ahora dicho, confirmar, decir mejor o decir lo mismo con “nuevas fuentes”; puse en tela de duda los relatos con los que hasta ahora se cuenta, particularmente el juego de causas y razones. Es éste un presupuesto fundamental. La primera embestida fue contra el pretendido carácter de necesidad detrás de los sucesos, su carácter inevitable a la vez que glorioso. Tomé una a una las razones, indagué en ellas para descubrir algunas de sus más importantes utilidades. No las negué, ni las traté como simples mentiras, ni me indigné ante ellas. Simplemente examiné los discursos comprometidos en el incesante juego de lo verdadero y lo falso, sus condiciones de emergencia, conservación y articulación, y sus efectos sobre lo real, muy a la manera de una hiedra que se apodera y destruye, suplantando lo que otrora fue un robusto árbol. ¿De qué forma, pues, detrás de aquellas razones se libra una incesante batalla para conjurar los poderes, los peligros y dominar el acontecimiento aún hoy? ¿Cuál es el régimen de verdad que ordena aquellas razones como causas?

Más que presentarme fiel al pensamiento de Michel Foucault, lo utilicé. Foucault está en el punto donde se rematan las explicaciones aquí brindadas. Un paso atrás del texto finalmente escrito. Pero probablemente algunas de sus tesis sufrieron una cierta deformación. Si aquello sucedió, más que preocuparme, me siento complacido. La idea germinal consistió en pensar cómo en 1982 la guerra construyó un orden político. De qué forma la carnicería fue capaz de plantearse un “conjunto de positivities” –el régimen democrático– para seguir matando. Ese tenaz enfoque de ver las cosas desde su revés, como parte de la genealogía, es el punto fundamental desde donde pensé –mucho tiempo antes de escribir– cómo destruir las que hasta ahora han sido razones convertidas en causas. Por lo demás, están presentes otros postulados del pensamiento de Foucault. Su visión sobre el continuo racionalidad-irracionalidad; el análisis del poder desde cómo se ejerce, el poder en ejercicio, lo real, concreto y efectivo; emplazarse al ras de los hechos, antes que ver el poder desde la clase dominante de la que todo puede deducirse; el reconocimiento del papel del azar en los acontecimientos, en contra de la determinación de causas finales e intenciones firmemente cristalizadas; el postulado de la estrategia global, de conjunto; el postulado del saber en perspectiva, la mirada que

sabe desde dónde mira. En fin, decir cuánto de lo que hice fue fiel a las “recomendaciones-precauciones de método” que en varias ocasiones Foucault propuso, daría para mucho.

## BIBLIOGRAFÍA

### *Fuentes primarias*

- Bigwood, Jeremy (2003), “Israel’s Latin American Trail of Terror”, *Al Jazeera Network*, 5 de junio de 2003.
- Black, George (1983), “Israeli Connection: Not Just Guns for Guatemala”, *NACLA Report on the Americas*, mayo-junio, pp. 43-45.
- Carter, James (1997), “Interview with President Jimmy Carter”, en Scott Wolfel (ed.) (1998), *CNN Cold War Special Report*, Washington, D.C. (NSA: National Security Archive, George Washington University, Episode 18: Backyard) (Revisado en junio de 2004: <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/interviews/episode-18/carter1.html>).
- CEM (Centro de Estudios Militares) (1981), *Apresiasi estratégica del Estado guatemalteco*, Curso de Comando y Estado Mayor, Guatemala, Ejército de Guatemala.
- CERIGUA (1987), “Las sectas fundamentalistas y la contrainsurgencia en Guatemala”, Guatemala, CERIGUA (Centro Exterior de Reportes Informativos sobre Guatemala), marzo.
- CIA (Central Intelligence Agency) (1983), “Ríos Montt da carta blanca al Archivo para tratar con la insurgencia” (Washington, D.C., CIA, telegrama secreto, difundido: febrero de 1983, incluye comentarios del embajador de Estados Unidos en Guatemala F. Chapin), en Kate Doyle (ed.) (2000), *Los documentos*, vol. II, *El ejército de Guatemala: lo que revelan los archivos de los Estados Unidos*, Washington, D. C., NSA (National Security Archive) (Electronic Briefing Book, núm. 32).
- (1983a), “Resumen latinoamericano” (Washington D.C., CIA, informe secreto, difundido: 23 de mayo de 1983), en Kate Doyle (ed.) (2000), *Los documentos*, vol. II, *El ejército de Guatemala: lo que revelan los archivos de los Estados Unidos*, Washington, D. C., NSA (National Security Archive) (Electronic Briefing Book, núm. 32).
- Chamorro, Edgar (1985), “Declaración jurada de Edgar Chamorro el 5 de septiembre de 1985”, *Nicaragua contra los Estados Unidos*, La Haya, Tribunal Internacional de Justicia.
- DIA (Defense Intelligence Agency) (1979), “Resumen e Inteligencia Militar (MIS), volumen III, América Latina (U)”, Washington D.C., DIA – Departamento de Defensa – División Occidental (informe secreto, difundido: noviembre de 1979), en Kate Doyle (ed.) (2000), *Los documentos*, vol. II, *El ejército de Guatemala: lo que revelan los archivos de los Estados Unidos*, Washington, D.C., NSA (National Security Archive) (Electronic Briefing Book, núm. 32).
- (1982), “Continúan las maquinaciones dentro de las fuerzas armadas”,

Washington D.C., DIA – Departamento de Defensa – Estado Mayor Conjunto – Centro de Mensajes (telegrama secreto, difundido: 16 de abril de 1982, información recolectada: 13 de abril de 1982), en Kate Doyle (ed.) (2000), *Los documentos*, vol. II, *El ejército de Guatemala: lo que revelan los archivos de los Estados Unidos*, Washington, D.C., NSA (National Security Archive) (Electronic Briefing Book, núm. 32).

- (1983), “Posible golpe de Estado en Guatemala”, Washington D.C., DIA – Departamento de Defensa – Estado Mayor Conjunto – Centro de Mensajes (telegrama secreto, difundido: 30 de junio de 1983, información recolectada: 16 de junio de 1983), en Kate Doyle (ed.) (2000), *Los documentos*, vol. II, *El ejército de Guatemala: lo que revelan los archivos de los Estados Unidos*, Washington, D.C., NSA (National Security Archive) (Electronic Briefing Book, núm. 32).
- Gramajo Morales, Héctor Alejandro (1988), “Discurso en ocasión del 117° aniversario de fundación del ejército guatemalteco”, Guatemala, *Prensa Libre*, 3 de julio.
- (1995), *De la guerra... a la guerra. La difícil transición política en Guatemala*, Guatemala, Fondo de Cultura Editorial.
- (1997), “Political Transition in Guatemala (1980-1990): A Perspective from Inside Guatemala’s Army”, en Jorge Domínguez y Marc Lindenburg (eds.), *Democratic Transitions in Central America*, Gainesville, University Press of Florida.
- (2003), “Proceso de militarización de la sociedad guatemalteca durante las décadas de los 70’s y 80’s”, en ECAP (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial) (comp.), *Psicología social y violencia política*, Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos.
- Inforpress* (varios números), Guatemala, Inforpress Centroamericana.
- Jacobs, Robert L. (1981), “Guatemala: ¿qué es lo próximo?”, Washington, D.C., Departamento de Estado (memorando dirigido a ARA/PPC – Sr. Einaudi), en Kate Doyle (ed.) (2000), *Los documentos*, vol. II, *El ejército de Guatemala: lo que revelan los archivos de los Estados Unidos*, Washington, D. C., NSA (National Security Archive) (Electronic Briefing Book, núm. 32).
- Miami Herald* (1982), 13 de diciembre, en Cheryl A. Rubenberg (1986), “Israel and Guatemala: Arms, Advice and Counterinsurgency”, *MERIP Middle East Report*, núm. 140, Terrorism and Intervention (mayo–junio), pp. 16-22, 43 y 44.
- Nairn, Allan (1989), “Reagan Administration’s Links to Guatemala’s Terrorist Government”, *Covert Action Quarterly*, verano.
- New York Times* (1984), 22 de abril, en Cheryl A. Rubenberg (1986), “Israel and Guatemala: Arms, Advice and Counterinsurgency”, *MERIP Middle East Report*, núm. 140, Terrorism and Intervention (mayo–junio), pp. 16-22, 43 y 44.
- NSA (National Security Archive) (1987), *The Chronology. The Documented Day-by-Day Account of the Secret Military Assistance to Iran and the Contras*, Washington D.C., Warner Books.
- Osorio, Carlos (2000), “Unidades y oficiales del ejército de Guatemala”, en Kate Doyle (ed.) (2000), *Los documentos*, vol. II, *El ejército de Guatemala: lo que revelan los archivos de los Estados Unidos*, Washington, D.C., NSA (National Security Archive) (Electronic Briefing Book, núm. 32).

- Paredes Díaz, Jennyffer (2003), "Base de la democracia", *Prensa Libre*, 23 de marzo.
- Parry, Robert (1999), "Reagan & Guatemalan Death Files", *iF Magazine*, mayo-junio.
- Payeras, Mario (1987), *El trueno en la ciudad: episodios de la lucha armada urbana de 1981 en Guatemala*, México, Juan Pablos Editor.
- Prensa Libre* (2000), "A dieciocho años del golpe de Estado. Efemérides: a propósito del mismo, Gordillo conversó con *Prensa Libre*", 23 de marzo.
- Smith, J. Y. (2002), "Gen. Vernon A. Walters; CIA Official, Diplomat", *The Washington Post*, 14 de febrero.
- U.S. Congress, House, Committee on Foreign Affairs (1981), *Human Rights in Guatemala, Hearing before...*, Washington D.C., U.S. Government Printing Office (Ninety-Seventh Congress – First Session – 30 de julio).
- , Senate, Committee on Foreign Relations (1981), *The Situation in El Salvador, Hearing before...*, Washington D.C., U.S. Government Printing Office.
- (1982), *El Salvador: the United States in the Midst of a Maelstrom, Hearing before...*, Washington D. C., U. S. Government Printing Office.
- (1982a), *Presidential Certifications on Conditions in El Salvador, Hearing before...*, Washington D.C., U.S. Government Printing Office.
- Washington Post* (1984), 16 de junio, en Cheryl A. Rubenberg (1986), "Israel and Guatemala: Arms, Advice and Counterinsurgency", *MERIP Middle East Report*, núm. 140, Terrorism and Intervention (mayo-junio), pp. 16-22, 43 y 44.

#### Fuentes secundarias

- Anderson, Scott y Jon Lee Anderson (1986), *Inside the League: The Shocking Expose of How Terrorists, Nazis, and Latin American Death Squads Have Infiltrated the World Anti-Communist League*, Nueva York, Dood, Mead & Co.
- Andrade Díaz-Durán, Fernando (1988), "Transición política en Guatemala: naturaleza, alcances y perspectivas", en ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales), IV Seminario sobre la Realidad Nacional: Transición Política, Diálogo Nacional y Pacto Social en Guatemala, Guatemala, ASIES, 23 al 25 de mayo.
- ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales) (1995), *Reorganización, auge y desarticulación del movimiento sindical*, tomo 3, *Más de 100 años del movimiento urbano obrero en Guatemala*, Guatemala, ASIES.
- Asturias Montenegro, Gonzalo (1995), *Los 504 días de Ríos Montt*, Guatemala, Editorial Gramma.
- Benítez Manaut, Raúl (1989), *La teoría militar y la guerra civil en El Salvador*, El Salvador, UCA Editores.
- Black, George, Milton Jamail y Norma Stoltz Chinchilla (1984), *Garrison Guatemala*, Nueva York, Montly Review Press.
- Bulmer-Thomas, Victor (1987), *The Political Economy of Central America since 1920*, Cambridge, Mass., Cambridge University Press.
- CEPAL (Comisión Económica Para América Latina) (1986), *Para entender Centroamérica: raíces y perspectivas de la crisis económica*, San José de Costa Rica, CEPAL.

- (2001), *Istmo centroamericano: medio siglo de estadísticas macroeconómicas, 1950-2000*, México, CEPAL.
- Contreras R., J. Daniel y Silvia Castro de Arriaza (1997), “Historia política (1954-1995)”, en J. Daniel Contreras R. (dir.), *Historia general de Guatemala*, tomo VI, *Época contemporánea: de 1945 a la actualidad*, Guatemala, Asociación de Amigos del País/Fundación para la Cultura y el Desarrollo.
- Curtis, Michael y Susan Aurelia Gitelson (eds.) (1976), *Israel in the Third World*, New Brunswick, Transaction Books.
- Daetz Caal, Arnoldo (1997), “Elecciones y partidos políticos”, en J. Daniel Contreras R. (dir.), *Historia general de Guatemala*, tomo VI, *Época contemporánea: de 1945 a la actualidad*, Guatemala, Asociación de Amigos del País/Fundación para la Cultura y el Desarrollo.
- Dosal, Paul (1995), *Power in Transition: The Rise of Guatemala’s Industrial Oligarchy, 1871-1994*, Westport, Praeger.
- Esquivel, Julia (1992), “Las sectas fundamentalistas en Guatemala”, en *Guatemala. Seminario Estado, clases sociales y cuestión étnico-nacional*, México, CEIDEC (Centro de Estudios Integrados de Desarrollo Comunal).
- Fajardo Maldonado, Arturo, Fernando Andrade Díaz-Durán y Francisco Villagrán de León (1997), “Relaciones entre Guatemala y Estados Unidos, 1954-1990”, en J. Daniel Contreras R. (dir.), *Historia general de Guatemala*, tomo VI, *Época contemporánea: de 1945 a la actualidad*, Guatemala, Asociación de Amigos del País/Fundación para la Cultura y el Desarrollo.
- Figueroa Ibarra, Carlos (1991), *El recurso del miedo. Ensayo sobre Estado y terror en Guatemala*, San José de Costa Rica, EDUCA.
- Foucault, Michel (1976), *Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976)*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. (Segunda reimpresión de la primera edición en español: 2000. Mauro Bertani y Alessandro Fontana, edición; Francois Ewald y Alessandro Fontana, directores; Horacio Pons, traductor de: *Il faut défendre la société. Cours au Collège de France*, 1976, Gallimard, París, 1997.)
- García-Granados, Jorge Raúl (1948), *The Birth of Israel: The Drama as I Saw It*, Nueva York, Alfred A. Knopf.
- García Ruíz, Jesús (1985), “Las sectas fundamentalistas en Guatemala”, Guatemala, CYTUA (Ciencia y Tecnología para Guatemala), Cuaderno núm. 4.
- Garrand, Virginia (1998), “El protestantismo, 1954-1990”, en *Historia general de Guatemala*, Guatemala, Asociación de Amigos del País.
- Gordon, Sara (1989), *Crisis política y guerra en El Salvador*, México, Siglo Veintiuno Editores.
- Handy, Jim (1986), “Resurgent Democracy and the Guatemalan Army”, *Journal of Latin American Studies*, vol. 18, núm. 2 (noviembre), pp. 383-408.
- IINDEF (International Institute of In-Depth Evangelism) y SEPAL (Servicio Evangelizador para América Latina) (1981), *Directorio del movimiento protestante: Guatemala*, Guatemala.
- Jonas Bodenheimer, Susanne (1994), *La batalla por Guatemala*, Guatemala, Editorial Nueva Sociedad/FLACSO (Lilian Arce y Luz Mercedes Arce, traducción de: *The*

- Battle for Guatemala: Rebels, Death Squads, and U. S. Power*, Boulder, San Francisco & Oxford, Westview Press).
- Kaufman, Edy, Yoram Shapira y Joel Barromi (1979), *Israeli – Latin American Relations*, New Brunswick, Transaction Books.
- Klare, Michael (1981), *Beyond the “Vietnam Syndrome”*, Washington, D.C., Institute for Policy Studies.
- McClintock, Michael (1985), *The American Connection*, vol. II, *State Terror and Popular Resistance in Guatemala*, Londres, Zed Books.
- Nietzsche, Friedrich (1874), *Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida*, Madrid, EDAF, 2000.
- Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (1996), “Rostros de las prácticas etnocidas en Guatemala”, *Cuadernos Constitucionales México – Centroamérica*, México, Centro de Estudios Constitucionales México-Centroamérica/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México/Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, núm. 24.
- Paschall, Rod (1985), “Low-intensity Conflict Doctrine: Who Needs It?”, *Parameters*, vol. XV, núm. 3.
- Rose, Suan y Quentin Schultze (1991), “¿Por qué el despertar evangélico en Guatemala?”, *Revista Focus*, núm. 103, CELEP (Centro Evangélico de Estudios Pastorales), Guatemala.
- Rubenberg, Cheryl A. (1986), “Israel and Guatemala: Arms, Advice and Counterinsurgency”, *MERIP Middle East Report*, núm. 140, Terrorism and Intervention (mayo-junio), pp. 16-22 y 43-44.
- Sarkesian, Sam C. (1981), “American Policy and Low-intensity Conflict: An Overview”, en Sam Sarkesian y William L. Scully (comps.), *U. S. Policy and Low-intensity Conflict. Potentials for Military Struggles in the 1980s*, New Brunswick-Londres, Transaction Books.
- Schirmer, Jennifer (2000), *El proyecto político de los militares en Guatemala*, Guatemala, FLACSO.
- Summers, Harry G. (1982), *Sobre estrategia*, México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1985 (traducción de: *On Strategy, A Critical Analysis of the Vietnam War*, California, Presidio Press).
- (1985), *The Vietnam War Almanac*, Nueva York, Presidio Press, 1999.
- Torres-Rivas, Edelberto (1987), *Centroamérica: la democracia posible*, San José de Costa Rica, EDUCA/FLACSO.
- (1998), *Del autoritarismo a la paz*, Guatemala, FLACSO.
- TSE (Tribunal Supremo Electoral) (2004), *Memoria de las elecciones generales 2003*, Guatemala.
- Yurrita Cuesta, Alfonso (1997), “El ejército”, en J. Daniel Contreras R. (dir.), *Historia general de Guatemala*, tomo VI, *Época contemporánea: de 1945 a la actualidad*, Guatemala, Asociación de Amigos del País/Fundación para la Cultura y el Desarrollo.